

DE MOC RA



El año electoral
de América Latina:
democracia e implicaciones
para Venezuela

Adriana Boersner-Herrera

Elecciones en Colombia:
seguridad, economía
e institucionalidad
regional

Elsa Cardozo

El horizonte electoral
latinoamericano

Juan Miguel Matheus

2026: Año electoral
en América Latina.
Perspectiva Histórica.

Lucía Galeno

Brasil perspectivas
electorales

Jesús E. Mazzei Alfonso

TI ZA CIÓN



Veni, vidi, vici:
Donald Trump,
realismo político,
América Latina
y desorden multipolar
Rommer A. Ytriago F.

La fragilidad
de la democracia:
transición y cultura
republicana
en Chile
Kevin Canales García

Democracias bajo asedio.
El narco como el gran elector
de América Latina
Sebastian Horesok

DE MOC RA TI ZA, CIÓN

El año electoral de América Latina:
democracia e implicaciones
para Venezuela

3 **Adriana Boersner-Herrera**

Elecciones en Colombia: seguridad,
economía e institucionalidad
regional

15 **Elsa Cardozo**

El horizonte electoral
latinoamericano

25 **Juan Miguel Matheus**

2026: Año electoral en América Latina.
Perspectiva Histórica.

34 **Lucía Galeno**

Brasil perspectivas
electorales

45 **Jesús E. Mazzei Alfonzo**

Veni, vidi, vici: Donald Trump,
realismo político, América Latina
y desorden multipolar
57 Rommer A. Ytriago F.

La fragilidad de la democracia:
transición y cultura republicana
en Chile
73 Kevin Canales García

Democracias bajo asedio.
El narco como el gran elector
de América Latina
86 Sebastian Horesok

Adriana Boersner-Herrera

El año electoral de América Latina: democracia e implicaciones para Venezuela

América Latina atraviesa en 2026 uno de sus calendarios electorales más densos y políticamente significativos en mucho tiempo. Millones de ciudadanos ya empezaron a acudir a las urnas para elegir gobiernos en un contexto marcado por la extrema polarización, el retorno y avance de la derecha, y una creciente hegemonía estadounidense cada vez menos disimulada. Esa renovada influencia estadounidense se expresa no solo en decisiones estratégicas, sino también en conferencias de prensa y decisiones que, de forma cada vez más reveladora, emanan desde Mar-a-Lago, el club privado de Donald Trump.

El telón de fondo regional lo dio Chile en diciembre de 2025, cuando José Antonio Kast, el candidato de derecha obtuvo el 58,16% de los votos frente a la candidata de izquierda, Jeannette Jara. El resultado en Chile no fue una anomalía, fue la confirmación de un cambio de ola ideológica que recorre la región, pero también una expresión de voto castigo para el gobierno saliente de Gabriel Boric. Honduras también celebró elecciones presidenciales en noviembre de 2025, en un proceso marcado por la abierta interferencia del presidente Donald Trump, quien declaró públicamente su respaldo al candidato de derecha y empresario, Tito Asfura, y aseguró que tanto él como Asfura podían trabajar juntos

para combatir a los narcos y procomunistas¹. De igual manera, las elecciones legislativas en Argentina en octubre de 2025 estuvieron marcadas por una injerencia sin precedentes: Trump advirtió explícitamente que Estados Unidos retiraría su apoyo económico al país si los candidatos afines a Milei² no salían victoriosos. Una vez se dio la victoria oficialista, Trump no la celebró como un triunfo argentino, sino como propio: declaró públicamente que el resultado fue, en realidad, gracias a él.

El año 2026 no tardó en comenzar con un calendario electoral intenso. Costa Rica abrió el año el 1° de febrero con elecciones generales, en las que Laura Fernández, candidata del centroizquierdista Partido Pueblo Soberano, ganó en primera vuelta con el 48,33% de los votos, evitando una segunda vuelta. Perú celebró sus elecciones presidenciales y legislativas el 12 de abril, las primeras con Congreso bicameral desde 1992, en un contexto de profunda desconfianza institucional, con un presidente, José María Balcázar, que llega al final de su mandato con una de las aprobaciones regionales más bajas³. Keiko Fujimori, candidata de derecha de Fuerza Popular, encabezó la primera vuelta con el

-
- 1 Reuters, "Trump backs conservative Asfura in Honduras' tight presidential race", November 26, 2025, <https://www.reuters.com/world/americas/trump-says-he-hopes-honduras-elects-conservative-national-partys-asfura-2025-11-26/>
 - 2 Real Instituto Elcano, "Las razones de la victoria de Javier Milei", Carlos Malamud, Octubre 29, 2025, <https://www.realinstitutoelcano.org/comentarios/las-razones-de-la-victoria-de-javier-milei/>
Noticias DW, "Trump felicita a Milei por su «victoria aplastante»", Octubre 27, 2025, <https://www.dw.com/es/trump-felicita-a-milei-por-su-victoria-aplastante-en-legislativas-de-argentina/a-74506558>
 - 3 Mariana Quilca Catacora, "Presidente José María Balcázar tiene la aprobación más baja de Latinoamérica, incluso menor que la de Delcy Rodríguez", *Infobae*, Abril 20, 2026, <https://www.infobae.com/peru/2026/04/20/presidente-jose-maria-balcazar-tiene-la-aprobacion-mas-baja-de-latinoamerica-incluso-menor-que-la-de-delcy-rodriguez/>

17,07% de los votos, asegurando su lugar en el balotaje del 7 de junio. En segundo lugar, se ubicó Roberto Sánchez, candidato de izquierda de Juntos por el Perú, con el 12,04%, partido cercano al expresidente Pedro Castillo, quien pasará a disputar la segunda vuelta en una contienda que se perfila como una polarización entre los extremos del espectro político peruano⁴. Colombia enfrentó sus elecciones legislativas el 8 de marzo de 2026 en el cual el partido de Gustavo Petro se vio beneficiado, y convocará la primera vuelta presidencial el 31 de mayo, con figuras como el senador Iván Cepeda (izquierda, Pacto Histórico) y el abogado Abelardo de la Espriella (derecha, defensores de la patria) como favoritos iniciales. Brasil, la mayor economía de la región, cerrará el ciclo electoral el 4 de octubre con votaciones simultáneas para presidencia, Congreso y gobernadores, en una contienda que ya perfila a Lula da Silva buscando un cuarto mandato, enfrentando a Flávio Bolsonaro en un contexto polarizante y de grandes disputas políticas y legales⁵.

Y mientras la región debate el rumbo de sus democracias y liderazgos, Venezuela vive su propia paradoja: un régimen que sigue siendo autoritario pero que perdió a su líder de trece años, capturado por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026 y trasladado a Nueva York para enfrentar cargos penales. Ahora el régimen de Venezuela opera bajo el liderazgo de Delcy Rodríguez, una presidenta de facto cuya permanencia en el poder depende de Washington. En estas líneas se examina el panorama electoral de 2026 en América Latina, los posibles escenarios políticos y sus implicaciones para la democracia regional y Venezuela en particular.

4 ONPE, "Elección de fórmula presidencial", <https://resultadoelectoral.onpe.gob.pe/main/resumen>

5 Esther Solano, Alexandre Fuccille, "Brasil bajo la polarización: balance y perspectivas", *Nueva Sociedad*, Marzo-Abril 2026, <https://nuso.org/articulo/322-brasil-bajo-la-polarizacion/>

Escenarios: El mapa electoral de América Latina en 2026.

Lo que este ciclo electoral hace visible es que los cambios de gobierno en la región no operan en el vacío: cada resultado retroalimenta la configuración de poder en Venezuela. Lo que antes era objeto de conspiraciones sobre injerencia encubierta se ha convertido en política exterior declarada, ejecutada en tiempo real por redes sociales, conferencias de prensa y amenazas económicas explícitas. A partir de este contexto, hay dos escenarios posibles para el cierre del ciclo electoral de 2026, y un riesgo estructural que los atraviesa a ambos.

Escenario 1: La consolidación del eje derechista.

Si las elecciones en Colombia y Brasil producen victorias de derecha o centroderecha, 2026 cerraría con el mapa ideológico latinoamericano más volcado hacia ese polo desde los años noventa⁶. En este posible escenario, el eje Kast-Milei-De la Espriella-Bolsonaro se consolidaría como el bloque hegemónico regional, con implicaciones directas para organismos regionales, y con una política de alineamiento casi total con Washington. Para Venezuela, ese contexto significaría el cierre definitivo de los márgenes de maniobra regional: sin Colombia de Petro como interlocutor y sin Lula como contrapeso normativo, Rodríguez quedaría completamente expuesta a los términos que Washington defina unilateralmente para la transición.

6 Victoria Dannemann, "Derecha en alza: el nuevo mapa político de América Latina", *DW*, Diciembre 19, 2025, <https://www.dw.com/es/derecha-en-alza-el-nuevo-mapa-pol%C3%ADtico-de-am%C3%A9rica-latina/a-75243248>

Michael Reid, "America Latina gira a la derecha", *The New York Times*, Febrero 2, 2026, <https://www.nytimes.com/es/2026/02/02/espanol/opinion/america-latina-derecha-elecciones-trump.html>

Asumir que una Colombia o un Brasil de derecha operarían como un vector de presión democrática sobre Venezuela sería un error. Particularmente bajo la presidencia de Petro en Colombia, Bogotá actuó como interlocutor regional con Caracas, incluso en sus momentos de mayor tensión bilateral. Sin embargo, un gobierno colombiano de derecha, pese a su retórica antichavista, tendería a alinearse con la lógica pragmática de Washington: preservar la estabilidad del régimen de Rodríguez mientras fluye el petróleo, sin exigir cambios de condiciones políticas. El caso particular de De la Espriella es claro. Su vínculo previo con el entorno de Maduro⁷ y su necesidad de ganarse la confianza de la administración Trump lo colocarían en una posición de subordinación a la agenda energética estadounidense antes que en la de exigencia democrática en Venezuela. Paradójicamente, una Colombia de derecha no endurecería el cerco sobre Venezuela en términos políticos: lo que haría es cerrar el único canal diplomático que Bogotá mantenía con Caracas, dejando a Washington como el único interlocutor real y sin contrapesos. En un escenario de hegemonía derechista regional, ningún actor tendría la voluntad para presionar a Washington a acelerar una transición política en Venezuela, dejando el calendario venezolano enteramente a discreción de los intereses estadounidenses.

Escenario 2: La resistencia de la izquierda en los dos grandes.

Si Colombia elige un gobierno de izquierda y Lula retiene el poder en Brasil, la región quedaría dividida en dos bloques ideológicos, aunque no a partes iguales. Esa división, sin embargo, no

7 Carlos Cuevas, “¿Qué está en juego en la relación de Colombia con Venezuela y Ecuador en las elecciones?”, *Bloomberg Línea*, Mayo 6, 2026, <https://www.bloomberglinea.com/latinoamerica/colombia/que-esta-en-juego-en-la-relacion-de-colombia-con-venezuela-y-ecuador-en-las-elecciones/>

debe leerse automáticamente como una ventaja para la democracia venezolana. Los gobiernos de izquierda latinoamericanos han privilegiado históricamente el principio de no intervención y el diálogo sobre las exigencias de condiciones electorales verificables, y cuando han formulado condiciones, la distancia entre el discurso normativo y la presión operativa real ha sido, sistemáticamente, amplia. La izquierda regional puede hablar de democracia en Venezuela sin exigirla, y ese patrón no tiene razones estructurales para cambiar en el ciclo actual.

Brasil es la excepción parcial, y conviene precisar aquí en qué sentido. Lula ha condicionado retóricamente el reconocimiento internacional pleno del gobierno de Rodríguez a la celebración de elecciones libres, una posición más exigente en el discurso que la de Washington, cuya agenda ha privilegiado el acceso al petróleo sobre la reforma institucional. Pero Brasilia tiende a articular principios en foros multilaterales sin traducirlos en condiciones concretas y verificables sobre el terreno. Su peso es normativo y diplomático, no coercitivo: puede complicar el diseño unilateral de Washington e introducir exigencias en distintos organismos multilaterales, pero no tiene los instrumentos, ni históricamente la voluntad, para forzar a Caracas a cumplir un calendario electoral con estándares reales.

Colombia, por su parte, aportaría la continuidad del canal diplomático con Caracas, aunque las posturas dentro de la izquierda colombiana no son homogéneas frente a Venezuela. Ese canal, bajo Petro, sirvió como válvula de comunicación regional, pero nunca como mecanismo de presión democrática efectiva. En la práctica, mantenerlo abierto beneficia a Rodríguez: le ofrece legitimidad relacional y reduce su aislamiento sin exigirle nada a cambio. Pero la relación colombo-venezolana no es solo diplomática ni ideológica: es operativa, y esa dimensión complica el margen de maniobra de cualquier gobierno colombiano indepen-

dientemente de su signo político. El ELN y la Segunda Marquetalia han mantenido durante años una presencia importante en territorio venezolano, y varios de sus mandos más relevantes se refugiaron allí con la tolerancia del régimen de Chávez y Maduro. La captura de Maduro y la llegada de Rodríguez al poder los dejó en una posición de vulnerabilidad: según inteligencia militar colombiana⁸, el ELN ha comenzado a revisar rutas y logística para repatriar mandos desde Venezuela, ante la percepción de que el nuevo régimen ya no garantiza su seguridad. Ese repliegue tiene consecuencias directas para la seguridad interna colombiana: los mandos guerrilleros que regresan pueden reactivar estructuras y alterar los procesos de paz en curso, precisamente durante el período electoral. Bajo Petro, Venezuela fue además un actor indispensable en las negociaciones con el ELN, los diálogos dependían de que Caracas tolerara y facilitara el acceso a los mandos en su territorio. Con Rodríguez bajo tutela estadounidense, esa función mediadora queda en suspenso: ni el nuevo régimen tiene el mismo capital político con los grupos armados, ni Washington tiene incentivo para facilitar procesos de paz que impliquen reconocimiento de la guerrilla colombiana. Cualquier gobierno colombiano que llegue en junio heredará ese vacío.

El riesgo transversal: movimiento sin transición.

Independientemente de quién gane en Colombia o Brasil, hay un riesgo que atraviesa ambos escenarios y que constituye la amenaza más profunda al ciclo democrático de 2026: que una posible normalización económica de Venezuela avance sin condiciones políticas verificables, convirtiendo el proceso en lo que el

8 José David Rodríguez, "Inteligencia advierte posible éxodo de cabecillas del ELN desde Venezuela hacia Colombia", *W Radio/Caracol Radio*, enero 3 de 2026, <https://www.wradio.com.co/2026/01/04/inteligencia-advierete-posible-exodo-de-cabecillas-del-eln-desde-venezuela-hacia-colombia/>

analista Benigno Alarcón Deza describe como “normalización sin transición”⁹.

Cuatro meses después del 3 de enero, lo que está ocurriendo en Venezuela no es una transición: es movimiento sin dirección democrática verificable. El *chargé d'affaires* estadounidense John Barrett confirmó al llegar a Caracas que implementaría el plan de tres fases, pero solo la primera muestra señales de actividad, y aun esa de manera selectiva. La segunda fase, reactivación económica y reconciliación nacional, no ha comenzado formalmente, y la tercera fase, establecer un nuevo gobierno basado en la voluntad popular, permanece deliberadamente sin definir. En el mejor de los casos, las elecciones se situarían para mediados de 2027, después de las elecciones de medio término estadounidenses de noviembre de 2026, momento en que la prioridad política de Washington hacia Venezuela podría diluirse considerablemente.

Las condiciones sobre el terreno no respaldan el optimismo que se proyecta desde Washington. Venezuela sigue siendo sancionable: no posee Estado de derecho, no tiene cortes independientes, mantiene presos políticos, y el sector militar, que controla empresas estratégicas, puertos y la distribución de servicios y productos básicos, no ha iniciado ningún proceso de reestructuración ni profesionalización. Proyecciones del FMI para 2026 sitúan el crecimiento del PIB venezolano en -3,0% y la inflación en 682,1% anual¹⁰. Las inversiones no están llegando a la velocidad que algunos actores en Washington quisieran hacer creer al mundo: mien-

9 Benigno Alarcón Deza, “Normalization without transition: Delcy Rodríguez’s playbook”, *Americas Quarterly*, April 29, 2026, <https://www.americasquarterly.org/article/normalization-without-transition-delcy-rodriguez-playbook/>

10 Emile Sweigart, “Venezuela: A 2026 snapshot”, *Americas Quarterly*, Enero 20, 2026, <https://www.americasquarterly.org/article/venezuela-a-2026-snapshot/>

tras sectores como el petrolero, el gasífero y el minero sí podrían recibir capital externo en el corto y mediano plazo, dado que ya empiezan a existir algunos marcos contractuales con Chevron y las licencias OFAC, amplios sectores de la economía formal, la pequeña empresa, la agricultura y los servicios básicos no vislumbran inversión real en el futuro cercano. Igualmente, los venezolanos no perciben cambios materiales concretos de su vida cotidiana.

Cambios estructurales hace de la segunda fase del plan estadounidense el momento más crítico y estratégicamente valioso del proceso. Es precisamente en esa fase donde la presión internacional tiene mayor palanca: la reactivación económica debería condicionarse a reformas verificables en el sector militar y policial, en el sistema judicial, en la autoridad electoral, y en la liberación total de los presos políticos como precondition para avanzar hacia la tercera fase. Sin esa vinculación explícita, la normalización económica avanzará sin garantías políticas, fortaleciendo a Rodríguez mientras debilita el poder negociador de Washington y de la oposición democrática.

El mayor riesgo, entonces, no es simplemente la ausencia de transición: es su simulación. Como señala Benigno Alarcón¹¹, Venezuela podría llegar a una elección en 2027 con Rodríguez ya normalizada internacionalmente, sus instituciones formalmente restructuradas, pero materialmente capturadas, el Tribunal Supremo, el Poder Ciudadano, la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo siguen siendo designados por el propio régimen, el calendario electoral impuesto unilateralmente, y una comunidad internacional agotada. Ese escenario no sería una transición

11 Benigno Alarcón Deza, "Normalization without transition: Delcy Rodríguez's playbook", *Americas Quarterly*, April 29, 2026, <https://www.americasquarterly.org/article/normalization-without-transition-delcy-rodriguez-playbook/>

democrática: sería una transacción¹² o una formalización del autoritarismo bajo ropaje electoral, un modelo que América Latina ya conoció en el siglo XX.

Implicaciones para la Venezuela bajo Delcy Rodríguez: el autoritarismo con nuevo rostro.

La naturaleza del arreglo político entre Estados Unidos y el régimen de Rodríguez fue descrita por el propio Trump con una franqueza inusual. “Estamos gobernando Venezuela hasta que podamos realizar una transición segura, adecuada y sensata,” declaró. Sobre Rodríguez fue aún más explícito: “Está dispuesta a llevar a cabo lo que consideramos necesario para hacer Venezuela grande de nuevo. No tiene más opción.” Días después lanzó la amenaza directa: “Si Rodríguez no actúa correctamente, pagará un precio muy alto, probablemente mayor que el de Maduro.” El lenguaje no es el de un aliado: es el de un ocupante que nombra a un administrador. Su reconocimiento de Rodríguez como única líder del país le ha dado a ella tiempo para cambiar su imagen personal y prepararse como eventual candidata, mientras la segunda administración de Trump opera con un horizonte temporal limitado: si las elecciones venezolanas no se celebran antes de enero de 2029, la presión de Washington podría atenuarse o cambiar de objetivo ante un posible cambio de administración. Lo que Venezuela presenta hoy es una paradoja política de manual: un régimen que sigue siendo autoritario en su naturaleza, controla los medios, mantiene, mata o desaparece presos políticos¹³ bajo

12 International Crisis Group, “Venezuela después de Maduro: ¿Transacción o transición?”, Enero 9, 2026, <https://www.crisisgroup.org/es/stm/latin-america-caribbean/venezuela-united-states/venezuela-after-maduro-transaction-or-transition>

13 Efecto Cocuyo, “Carmen Navas, la madre de 83 años que recorrió las cárceles en busca de su hijo que el estado ya había enterrado”, Mayo 7, 2026, <https://efectococuyo.com/la-humanidad/carmen-navas-la-madre->

custodia, pero que ha perdido su soberanía efectiva hacia el exterior. No es una transición democrática: es un cambio de liderazgo bajo tutela externa, evocando los llamados *puppetregimes* o *regímenes títeres* del pasado.

La oposición venezolana, representada por María Corina Machado y Edmundo González, fue deliberadamente marginada del proceso posterior al 3 de enero. Sin embargo, la oposición no ha desaparecido del tablero: las reuniones de Machado en el exterior, incluyendo reuniones con oficiales de alto rango de la administración estadounidense, confirman que conserva apoyo internacional clave. La administración Trump mantiene así un doble canal: relación operativa con Rodríguez y contacto formal con la oposición. Esa ambigüedad beneficia a Washington en el corto plazo, pero crea una incertidumbre estructural sobre qué tipo de proceso resultará de esa ecuación. Venezuela ha sido, durante más de dos décadas, el arquetipo del debate latinoamericano sobre democracia y autoritarismo. Su situación actual, un régimen madurista en el nombre, tutelado a distancia por la Casa Blanca de Trump, descoloca los marcos ideológicos habituales con los que la región ha procesado ese debate. Esta paradoja venezolana es reveladora de un problema más amplio: cuando la presión por la democracia viene de una potencia que simultáneamente interfiere en otras elecciones, condiciona apoyo financiero a resultados electorales y declara que “gobernará” un país hasta que la transición le sea conveniente, la credibilidad del argumento democrático colapsa. Trump no defiende la democracia en Venezuela: defiende los intereses de Estados Unidos en Venezuela, y esa distinción es crucial para entender tanto la situación venezolana como la legitimidad del orden regional que se está viviendo.

de-86-anos-que-recorrio-carceles-buscando-a-un-hijo-que-el-estado-ya-habia-enterrado/

El año 2026 pudiera pasar a la historia como un año bisagra para la democracia latinoamericana. El volumen del calendario electoral es impresionante pero la cantidad de elecciones no garantiza la calidad de la democracia en la región, como bien saben los venezolanos. Lo que se está jugando en 2026 es si la democracia latinoamericana puede seguir siendo un proyecto autónomo o si se convertirá en un sistema de fachadas electorales donde los resultados son condicionados desde afuera y los líderes gobiernan bajo tutela, al menos mientras exista una administración en Washington que quiera tutelar. Para América Latina, la pregunta de 2026 no es solamente quién gana las elecciones: ¿los de derecha o los de izquierda? La tensión entre una derecha ascendente en el Cono Sur y una izquierda que pudiera retener dos de los países más grandes de América del Sur, Brasil y Colombia, no produciría necesariamente presión democrática coordinada sobre Venezuela: produciría un empate diplomático en el que Rodríguez navegaría con comodidad, usando a unos y a otros según convenga, sin verse obligada a concretar ninguna de las tres fases que Washington ha prometido pero que aún no ejecuta cabalmente. La pregunta más profunda es si la región es capaz de articular una respuesta colectiva a la erosión de su soberanía democrática. Y para Venezuela, la pregunta es más concreta: ¿es posible una transición democrática real cuando el actor que la impulsa lo hace por intereses energéticos y geopolíticos, sin exigir las condiciones institucionales mínimas que hacen de una elección algo más que un procedimiento?

Elsa Cardozo

Elecciones en Colombia: seguridad, economía e institucionalidad regional

Las elecciones legislativas y presidenciales en Colombia se han desarrollado en un entorno de grandes presiones de seguridad y económicas nacionales, fuertes tensiones con el gobierno de Estados Unidos, en medio de una debilitada institucionalidad regional. Globalmente, prevalecen la confrontación geopolítica, la volatilidad económica y el debilitamiento del derecho en todos los ámbitos.

En Latinoamérica el proceso colombiano se inserta en el ciclo electoral 2025-2027, de marcada tendencia a la polarización, en el que ha predominado la derrota de los oficialismos¹.

La tendencia a la polarización se acompaña con el atractivo de liderazgos fuertes: en la vertiente populista de izquierda que en nombre de la justicia social desafía y debilita a las instituciones de

1 Jorge Sahd, Daniel Zovatto eds., “Riesgo Político en América Latina 2026”, *Diálogo Político*, <https://dialogopolitico.org/documentos/riesgo-politico-en-america-latina-2026/>

Carlos Malamud, Rogelio Núñez Castellano, “Elecciones en América Latina (2026): del «giro a la derecha» y el voto de castigo al factor Trump”, *Real Instituto Elcano*, 26 enero 2026, <https://www.realinstitutoelcano.org/analisis/elecciones-en-america-latina-2026-del-giro-a-la-derecha-y-el-voto-de-castigo-al-factor-trump/>

control democrático y en la del extremo que reta a la institucionalidad desde el populismo de nuevas derechas que, privilegiando el orden y la seguridad, también confrontan a la institucionalidad democrática.

La tendencia a la alternancia de opciones políticas en el poder se manifiesta en la secuencia de las elecciones presidenciales que perdieron las candidaturas de izquierda en El Salvador (2019), Ecuador y Argentina (2023), Venezuela (2024), Chile, Honduras y Bolivia (2025). Sin embargo, varias elecciones presidenciales recientes también supusieron alternancia a la izquierda en Brasil y, por primera vez, en Colombia (2022), en Uruguay (2024), y en su continuidad en el caso de México (2024).

En ese contexto, la elección presidencial de 2026 en Colombia tiene especial interés: por lo que significa para los colombianos y para la institucionalidad democrática nacional, y por lo que proyecta regionalmente.

Panorámica de izquierda a derecha

Las opciones electorales con mayor apoyo sostenido incluyen en la izquierda a Iván Cepeda, el candidato del oficialista Pacto Histórico que se ha mantenido en el primer lugar de preferencia en las encuestas desde finales de 2025². Su partido logró la mayor cantidad del total de senadores (25 de 108) y representantes (37 de 161), pero lejos de la mayoría simple en ambas cámaras. Abelardo

2 Según la encuesta de *AtlasIntel*, “Elecciones Presidenciales Colombia 2026”, abril 2026, [https://www.lasillavacia.com/wp-content/uploads/2026/03/Encuesta-Electoral-Guarumo-Ecoanalitica-marzo-27-2026-.pdf](https://atlasintel.org/polls/exclusive-polls: la intencion de voto seria de 37,8% para Cepeda, 27,2% para De la Espriella y 22% para Valencia. No muy lejanos de los datos de fines de marzo de Guarumo Ecoanalítica, “Elecciones Presidencia de la República 2026”, marzo 2026, <a href=)

De la Espriella, de derecha nacional-populista, se mantuvo en el segundo lugar y su partido Salvación Nacional solo obtuvo 4 senadores y 1 representante. Tras la consulta de marzo lo alcanzó rápidamente la candidata Paloma Valencia, de la derecha tradicional del Centro Democrático, partido que obtuvo 17 senadores y 28 representantes. Es de mencionar que la candidatura centrista de Sergio Fajardo, pasó del tercero al cuarto lugar de las encuestas, con muy pocas posibilidades de entrar a la segunda vuelta y escasos escaños de su coalición, Ahora Colombia, en el Congreso. Los partidos tradicionales, Liberal y Conservador, han perdido proyección política por si solos, pero cuentan con votos para facilitar o complicar la fluidez de la agenda del Ejecutivo con, respectivamente, 13 y 10 senadores, y 28 y 19 representantes.

En el espectro de izquierda a derecha, la opción de Paloma Valencia tan identificada con la figura polarizante del expresidente Álvaro Uribe, ha buscado su acercamiento al centro político y su electorado. A ello han contribuido su proyección política personal, su experiencia de negociación parlamentaria, su selección de Juan Daniel Oviedo como compañero de fórmula y su contraste con el extremismo de las posiciones y propuestas de De la Espriella.

Los índices de rechazo a los candidatos —medidos dos meses antes de la primera vuelta— añaden pistas sobre la complejidad del cuadro electoral y postelectoral. En el conjunto de las opciones electorales con mayor apoyo, encabezan esta lista las opciones más polarizantes: la fórmula del Pacto Histórico y la de Salvación Nacional. Es menor el rechazo a la del Centro Democrático, y es mínimo a las opciones de centro propiamente dichas³.

Los resultados legislativos y la evidente polarización de posiciones y propuestas presidenciales que han empujado a los

3 Ibid.

extremos hacen previsible ciertas continuidades. De un lado, la necesidad y dificultad que seguirá teniendo la negociación de acuerdos para desarrollar la agenda de gobierno. Del otro, la tentación de tensar la institucionalidad y, desde las posiciones extremas, intentar alterarla por la vía de decretos presidenciales o de la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

La elección para los colombianos y la institucionalidad democrática

La violencia y las amenazas durante las campañas legislativa y presidencial —que tuvo su episodio más traumático en el atentado de junio de 2025 que costó la vida al precandidato del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay— proyecta su sombra sobre la campaña y para el momento mismo de la elección. A ello, como prelude de las tensiones institucionales, contribuyen las dudas sembradas por el presidente Gustavo Petro sobre el proceso electoral y su manejo por el Consejo Nacional Electoral. La desinformación alimenta el riesgo de desbordamiento de protestas en desconocimiento de resultados, como ya se vio en Estados Unidos en 2021 y Brasil en 2023, particularmente ante un resultado estrecho.

Es diverso el orden que en las encuestas se asigna a los temas que más preocupan a los colombianos, pero entre ellos se encuentran visiblemente los de orden público (seguridad, delincuencia, violencia y pérdida creciente de control territorial por el Estado); las preocupaciones sobre la economía, el desempleo y la cobertura de necesidades básicas, así como la corrupción, el acceso a la salud, la calidad de la educación y, en un registro diferente, los problemas de gestión gubernamental. Esas preocupaciones, con base en lo que confirman hechos, informes y análisis en cada uno de sus ámbitos, hacen que predominen los temores sobre el futuro de Colombia y prevalezca la desconfianza en instituciones políti-

cas fundamentales. Así lo evidencia el bajo nivel de credibilidad del Congreso, el sistema judicial y los partidos políticos, junto a la preocupación por el futuro de la democracia colombiana⁴.

Con este telón de fondo y teniendo en cuenta lo poco que en materia internacional indican los discursos y propuestas de los candidatos presidenciales con mayores opciones de triunfo, se perfilan tres orientaciones muy generales pero relevantes para Latinoamérica. La primera sería de continuidad del desafío-administrado frente a Estados Unidos, con énfasis en afinidades ideológicas regionales y extracontinentales revisionistas; la segunda, sería de acercamiento hemisférico desde una alianza muy estrecha con Washington y relaciones preferentes con gobiernos regionales de posiciones afines; la tercera, buscaría el equilibrio entre el cuidado de los vínculos con Estados Unidos, la región y la diversificación internacional. Es lo que han asomado las propuestas de Iván Cepeda desde la primera orientación, Abelardo de la Espriella en la segunda y Paloma Valencia entre la segunda y tercera.

El impacto de las elecciones colombianas se hará sentir regionalmente, para comenzar, por lo que proyecte el desarrollo mismo de las elecciones: acerca de la institucionalidad colombiana y sobre su modo de resolver las tensiones de un proceso electoral acompañado por amenazas y violencia. Esto es particularmente importante en un entorno regional y hemisférico en el que se han debilitado los contrapesos institucionales —nacionales e internacionales— ante las prácticas violatorias del Estado de derecho y la democracia.

4 *Alianza Cuidar la democracia*, “Así perciben los colombianos su democracia: claves y propuestas para cuidarla”, febrero 2026, <https://www.cesa.edu.co/news/elecciones-2026-alianza-cuidar-democracia-colombia/#:~:text=El%20CESA%2C%20junto%20a%2010%20universidades%20privadas%2C,vive%2C%20percibe%20y%20valora%20la%20democracia%20e>

Tres grandes temas: relaciones y condicionamientos regionales.

Las propuestas que tienen especial relevancia regional –conocidas a partir de programas, discursos y declaraciones de los candidatos con mayores apoyos según las encuestas– pueden agruparse en tres grandes conjuntos: seguridad, relaciones económicas e integración, foros e institucionalidad regional, atravesadas todas por la incidencia de relaciones críticas.

En materia de seguridad, es notable la relevancia de la situación y las tendencias nacionales para la región. Así es en el calamitoso balance de la política de “paz total”, manifiesto en el crecimiento de los grupos armados, en integrantes, en capacidades y en control territorial⁵ y en incremento de la violencia. Se añade, estrechamente asociado al despliegue de los actores ilícitos, el incremento sostenido de las hectáreas de cultivos de coca desde 2021, que alcanzan más de la mitad mundial⁶. Se trata de una economía en la que en torno a la explotación ilegal de oro y otros tráficó ilícitos, se desarrollan y compiten grupos armados en busca del control territorial en regiones como las fronteras de Arauca, Norte de Santander (Catatumbo), Putumayo, Nariño, Chocó y la región amazónica.

Ninguna de las estrategias esbozadas por los tres candidatos con mayor opción permite prever la reducción del impacto transfronterizo de las acciones de las organizaciones y actividades ilícitas.

5 Fundación Paz y Reconciliación, Vivamos Humanos, “La paz ¿cómo vamos?”, 2026, <https://vivamoshumanos.org/wp-content/uploads/2025/06/INFORME-LA-PAZ-COMO-VAMOS.pdf>

6 Nota Oficina de las Naciones Unidas para las Drogas y el Delito, Colombia. Monitoreo de Territorios con presencia de cultivos de coca 2023, febrero 2025, https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Colombia/Colombia_informe_monitoreo_2023.pdf

tas de los grupos armados. Su incidencia es particularmente grave en ausencia de contenciones institucionales y materiales, como ha estado ocurriendo en Venezuela⁷. Así se proyecta con la continuidad-ajustada de Cepeda, que propone retomar diálogos con sus garantías correspondientes, procurar la presencia del estado en las regiones críticas y desarrollar una política contra las drogas menos militar y más socioeconómica. También resultaría así con la seguridad total que plantea Valencia, aumentando la presión institucional y militar sobre los grupos armados y sus finanzas, y endureciendo la política contra las drogas ilícitas. Lo mismo ocurriría con el plan de choque de De la Espriella de someter en corto plazo a los grupos armados mediante la fuerza, destruir los cultivos ilícitos y recuperar el control territorial. En lo inmediato, es previsible la continuidad de los desbordamientos transfronterizos, lo que se verá agravado por las divergencias estratégicas regionales –como las manifiestas en las tensiones con Ecuador– y en la falta de acuerdos efectivos con Venezuela en esta materia, necesarios para ofrecer transparencia en el diagnóstico y genuina cooperación estratégica.

En cuanto a relaciones económicas e integración con la región, es poco lo que asoman las propuestas de los candidatos. Entre ellos hay visibles divergencias sobre la economía nacional que, ante la presión de la deuda y el déficit fiscal se ubican entre el rechazo a la “austeridad liberal” y las propuestas de reducción del gasto⁸. En lo más relevante para la proyección de tensiones y afinidades en posiciones regionales, se han puesto sobre la mesa la continuidad de la orientación hacia la transición energética y

7 Ramón Cardozo, “Los desafíos para Venezuela de la paz total en Colombia”, *DW*, 10 abril de 2026, <https://www.dw.com/es/los-desaf%C3%A1dos-para-venezuela-de-la-paz-total-en-colombia/a-76739883>

8 LLYC IDEAS, “Escenarios de gobierno de candidatos presidenciales”, Colombia, febrero 2026, https://llyc.global/wp-content/uploads/2026/02/Escenarios-de-Gobierno_LLYC_IDEAS.pdf

la agenda ambiental en el plan de Cepeda, y el impulso al sector minero-energético en los de Valencia y De la Espriella. Pese a las pocas referencias a la integración regional es inocultable la importancia de impulsar las exportaciones a la región en proporción, diversificación y complejidad. Esto hace relevante la participación de Colombia en acuerdos regionales y subregionales diversos: Alianza del Pacífico con México, Perú y Chile, la propia CAN y la Comunidad del Caribe y varios acuerdos bilaterales, entre ellos con Chile, Panamá y el reactivado con Venezuela. De ello es revelador que los planes de De la Espriella y Valencia insistan en el fortalecimiento de la vertiente comercial de la Cancillería.

Tampoco es de ignorar el gran peso de los intercambios con Estados Unidos y con China, los principales socios comerciales para Colombia: con una balanza levemente superavitaria en el primer caso y fuertemente deficitaria en el segundo. Esto seguirá teniendo una fuerte incidencia y generando tensiones en las relaciones internacionales de Colombia: entre, por un lado, las orientaciones oficialistas de impulsar el acercamiento geopolítico a China incluyendo la participación en la Iniciativa de la Franja y la Ruta firmada por Petro y, por el otro, las reservas y rechazos ante afinidades que puedan afectar las relaciones con Estados Unidos, que adicionalmente a lo comercial es la principal fuente de inversión extranjera directa y de cooperación en áreas críticas de seguridad y humanitaria. Con más fluidez se proyectan los significativos vínculos financieros, comerciales y de una amplia agenda de cooperación bilateral y regional con la Unión Europea.

En el ámbito político regional, a partir de lo comentado sobre seguridad e integración y con las pocas referencias explícitas a la institucionalidad regional de los tres candidatos con mayor opción de triunfo, puede esbozarse muy brevemente lo previsible en el tratamiento político de acuerdos y foros regionales.

Sobre la institucionalidad regional, Cepeda ha apoyado el perfil político de afinidades ideológicas de izquierda que tuvo Unasur y promueve en ese sentido la reorientación de la CAN y el fortalecimiento de Mercosur, si bien dentro de las limitaciones que impone el balance político regional y hemisférico presente. En cuanto al sistema interamericano, no hace llamados a retirarse y, por razones personales semejantes a las de Petro, favorece su protección de los derechos humanos, pero sin referencias a su alcance supranacional.

De la Espriella, desde la propuesta de una alianza y estrecha afinidad con el gobierno actual de Estados Unidos, se opone al multilateralismo en todas las instancias señalando que ninguna de ellas ha traído beneficios a Colombia. Por su parte, Valencia ha defendido a la Comunidad Andina, no favorece el acercamiento al Mercosur y mantiene una posición crítica a acuerdos políticos regionales y subregionales, como Unasur, que considera ideologizados. Favorece el acompañamiento de la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante los riesgos para la democracia, los derechos humanos y las elecciones y, en términos semejantes, busca la cooperación de la ONU en materia electoral y de seguridad.

En conjunto, la tendencia de posiciones sobre la institucionalidad regional, en todos sus ámbitos, sería a la continuidad de su debilitamiento, sea que por la defensa de posiciones antiliberales, con o sin el abandono de los acuerdos, o por el reconocimiento de las limitaciones de su alcance. Esto último deja, políticamente, el margen para su persistencia en materia de observación electoral y seguimiento y denuncias sobre derechos humanos: los que ha sostenido Valencia con referencias explícitas a Venezuela para advertir sobre los peligros para la democracia en Colombia.

...Y Venezuela

Venezuela es y seguirá siendo una suerte de nudo en los tres conjuntos de temas ya esbozados. La extensa y porosa frontera en la que se mueven grupos armados, sus actividades criminales y flujos ilícitos hacia y desde territorio venezolano son parte del problema de seguridad colombiano. En el ámbito humanitario, de derechos humanos y de seguridad, las dimensiones de la diáspora venezolana, un tercio de la cual está en Colombia, y los temores a su aumento, son parte de esa agenda por atender. También lo es la importancia de la relación económica transfronteriza, en medio de las dificultades para sostener los intercambios y el cumplimiento venezolano de los términos acordados. En cuanto a la institucionalidad y los foros regionales, la participación de Venezuela ha complicado la construcción de acuerdos y consensos en todos los ámbitos.

A facilitar la transición democrática venezolana no contribuiría la ambigüedad normalizadora de la continuidad del interinato chavista que proyectan los dichos de Cepeda, pero tampoco la ruptura y omisión que asoma De la Espriella. Sí podría contribuir, coherentemente con su atención a los tres grandes conjuntos de temas, que Valencia hiciera de sus advertencias domésticas sobre la situación venezolana una agenda nacional y regionalmente constructiva, comenzando por reconocer la trascendencia que la recuperación de Estado de derecho y democracia en Venezuela tiene para la seguridad, prosperidad y democracia de Colombia y toda la región.

Juan Miguel Matheus

El horizonte electoral latinoamericano

No quisiera escribir estas páginas como un reporte técnico ni como un estudio académico convencional. Tampoco pretendo ofrecer un inventario exhaustivo de encuestas, alianzas o probabilidades electorales. Este texto es otra cosa. Un ensayo político sobre el clima espiritual de América Latina en vísperas de un nuevo ciclo electoral. Por esa razón no recurriré aquí a largas citas ni a un aparato bibliográfico destinado a demostrar erudición. Prefiero moverme entre tendencias visibles, intuiciones políticas y coordinadas generales de comprensión histórica. A veces los continentes revelan mejor su verdad en la atmósfera de una época que en el detalle minucioso de una estadística.

América Latina se aproxima a una nueva secuencia de elecciones presidenciales y parlamentarias en 2026 y 2027. Colombia entrará pronto en una disputa decisiva después del experimento político de Gustavo Petro. Brasil volverá a girar alrededor de su polarización interminable. Perú continúa atrapado en una fragmentación que parece haberse convertido en sistema político. Bolivia enfrenta tensiones que vuelven a abrir antiguas fracturas nacionales. Honduras y Guatemala siguen intentando sostener instituciones débiles bajo presión criminal permanente. Y Vene-

zuela continúa siendo la herida política abierta más profunda del continente.

Sin embargo, el verdadero problema latinoamericano ya no consiste simplemente en quién gana las elecciones. El problema es otro: qué tipo de régimen político emerge después de ellas. Durante décadas creímos que votar bastaba para sostener en pie las democracias. Hoy sabemos que no es así.

La cuestión posee además una dimensión cultural más profunda. América Latina no atraviesa solamente una crisis de gobiernos, partidos o liderazgos. Atraviesa también un desgaste de ciertas convicciones democráticas fundamentales. Intentaré desarrollar algunas ideas que ayuden a comprender ese proceso.

Las elecciones siguen existiendo. Incluso se multiplican. Pero la relación entre sufragio y libertad política continúa debilitándose en buena parte de la región. América Latina entra en un ciclo electoral marcado por el cansancio institucional, la inseguridad social, el desprestigio de los partidos y la creciente fascinación por formas concentradas de poder. Allí reside el problema de fondo.

El agotamiento del ciclo progresista

Durante buena parte de las primeras décadas del siglo XXI, América Latina estuvo dominada por gobiernos de izquierda o centroizquierda que lograron construir enorme popularidad política. Hugo Chávez, los Kirchner, Rafael Correa, Evo Morales o Fernando Lugo expresaron, cada uno a su manera, un mismo clima regional. Sus diferencias fueron reales. Pero todos participaron, en distintos grados, de un mismo desplazamiento latinoamericano hacia formas crecientemente plebiscitarias de legitimidad.

Aquel ciclo combinó expansión del Estado, liderazgo personalista, desconfianza hacia los límites liberales del poder y oferta de reparación social mediante concentración política. Además, tuvo a su favor una ventaja decisiva: abundancia económica. El auge de las materias primas permitió financiar políticas sociales ambiciosas y reducir pobreza en distintos países. Millones de latinoamericanos mejoraron sus condiciones materiales de vida. La izquierda logró entonces construir una narrativa poderosa: la democracia no debía limitarse a garantizar libertades formales sino corregir desigualdades históricas.

En algunos casos el progresismo derivó directamente hacia el autoritarismo. Venezuela representa el ejemplo más evidente. Nicaragua terminó convertida en una dictadura familiar. Bolivia experimentó tensiones crecientes entre hegemonía política y un supuesto pluralismo democrático. En otros países, incluso sin ruptura institucional abierta, aparecieron fenómenos semejantes: debilitamiento de controles republicanos, hipertrofia presidencial, colonización partidista del Estado y creciente polarización política.

Pero el agotamiento del ciclo progresista no obedece solamente a errores de gobierno. Existe también un cambio de sensibilidad social en América Latina. La región dejó de discutir prioritariamente cómo distribuir prosperidad y comenzó a preguntarse cómo sobrevivir al miedo.

La inseguridad, la inflación, la corrupción y el deterioro de los servicios públicos modificaron las prioridades políticas de millones de personas. Muchos ciudadanos ya no buscan solamente igualdad. Buscan estabilidad, autoridad y orden.

La nostalgia latinoamericana por el hombre fuerte

Nayib Bukele probablemente sea hoy la figura política más popular del continente, incluso fuera de El Salvador. No porque haya exportado un modelo constitucional sofisticado. Lo que ha exportado es algo mucho más profundo: una intuición política.

Sus altos y preocupantes niveles de aceptación popular descansan en una promesa elemental: imponer orden allí donde el Estado parecía haber desaparecido, aniquilar el caos con mano dura.

América Latina transmite un cansancio institucional difícil de ocultar. Los parlamentos son percibidos como espacios improductivos. Los partidos dejaron de ser vistos como instrumentos de representación y comenzaron a parecer estructuras vacías dedicadas apenas a sobrevivir electoralmente. Los tribunales generan desconfianza. La burocracia aparece asociada a corrupción o incompetencia. En ese contexto, el liderazgo fuerte recupera atractivo cultural. Bukele no inventó esa tendencia. Simplemente la encarnó con eficacia.

Algo semejante ocurre, con otros matices, en distintas partes de la región. Javier Milei expresa el agotamiento argentino frente a décadas de deterioro económico y decadencia política. En otros países emergen figuras que construyen legitimidad mediante una crítica frontal a las mediaciones institucionales y a los mecanismos tradicionales de representación.

La política latinoamericana se vuelve progresivamente más emocional, más agresiva y más personalista. Y cuando eso ocurre, las instituciones empiezan a perder autoridad moral frente a la figura del líder.

América Latina conoce bien esa tentación. La historia regional está llena de hombres providenciales que prometieron salvar a sus sociedades del caos mediante concentración de poder. El problema es que casi siempre terminaron debilitando las instituciones que hacían posible la libertad política.

La crisis de los partidos

Durante buena parte del siglo XX, los partidos funcionaron como estructuras de integración social y formación cívica. Organizaban ideologías, producían liderazgos y articulaban intereses territoriales. Incluso con todos sus defectos, ayudaban a dar estabilidad a la vida pública. Ese mundo prácticamente desapareció.

En muchos países los partidos dejaron de ser comunidades políticas relativamente permanentes y se transformaron en plataformas electorales organizadas alrededor de individuos. Perú constituye el caso más extremo. Pero el fenómeno atraviesa gran parte del continente. La militancia perdió densidad. Las redes sociales sustituyeron progresivamente al trabajo político orgánico. Las campañas se volvieron instantáneas y emocionales.

En este sentido, la consecuencia institucional es devastadora. Los parlamentos se fragmentan. Los gobiernos pierden capacidad de construir mayorías estables. La gobernabilidad se deteriora. Y frente a esa parálisis aparece nuevamente la tentación del poder concentrado: decretos, estados de excepción, mecanismos extraordinarios o formas de exacerbación del poder.

El círculo es evidente. Cuanto más se debilitan las instituciones deliberativas, mayor es la demanda social de soluciones rápidas. Y cuanto más predominan las soluciones rápidas, más se erosionan las instituciones republicanas.

En América Latina, la crisis de los partidos está dejando a la democracia sin estructura intermedia entre ciudadanía y poder. Y cuando desaparecen las mediaciones, el caudillismo encuentra terreno fértil.

Seguridad y miedo

La cuestión de la seguridad transformó completamente el debate político latinoamericano. Durante años la región discutió principalmente sobre pobreza, desigualdad y crecimiento económico. Hoy el miedo ocupa el centro de la vida pública. El crecimiento del narcotráfico, de las economías criminales y de las organizaciones armadas modificó radicalmente la experiencia cotidiana de millones de personas.

Ecuador constituye un caso dramático. México enfrenta desde hace tiempo una penetración estructural del crimen organizado. Colombia vuelve a experimentar dinámicas complejas de fragmentación violenta. Centroamérica continúa marcada por estructuras criminales capaces de disputar territorialmente la autoridad del Estado.

La consecuencia política de este fenómeno es enorme. Cuando el miedo domina la vida social, la relación entre libertad y autoridad cambia inevitablemente. Muchos ciudadanos comienzan a aceptar restricciones institucionales que en otro momento considerarían inaceptables. El orden aparece como condición previa de cualquier otro derecho. Allí reside parte del atractivo contemporáneo de los estados de excepción y de las “interdicciones constitucionales”. Los pueblos se someten a una cínica transacción con los “hombres fuertes”: el trueque de libertades civiles por seguridad.

Pero existe un problema histórico con la excepción: casi nunca permanece temporal. La excepción tiende a expandirse. Termina

convirtiéndose en hábito de gobierno. Y en ese momento las constituciones comienzan lentamente a perder fuerza normativa y autoridad moral. Las sociedades cansadas suelen terminar entregando su libertad exactamente a quienes prometen protegerlas.

Venezuela como advertencia continental

Venezuela representa la expresión más extrema de esta deriva latinoamericana. El chavismo comprendió antes que muchos otros que el autoritarismo del siglo XXI podía coexistir con elecciones, parlamentos, constituciones y rituales plebiscitarios. Durante años el régimen mantuvo una apariencia democrática mientras destruía progresivamente la autonomía institucional, el pluralismo político y el Estado de derecho.

Por eso Venezuela no constituye solamente una tragedia nacional. Constituye también una advertencia continental. El caso venezolano demuestra que una democracia puede morir lentamente sin necesidad de un golpe militar clásico. Puede degradarse desde dentro. Puede conservar formalidades constitucionales mientras el poder real se concentra progresivamente en estructuras autoritarias.

Pero Venezuela también plantea otra discusión importante para el futuro latinoamericano: la diferencia entre elecciones destinadas a perpetuar hegemonías y elecciones verdaderamente liberadoras. No toda elección inaugura democracia. Existen procesos electorales diseñados para producir legitimidad internacional sin permitir alternancia real. Existen elecciones incapaces de alterar las estructuras efectivas del poder. Y existen elecciones capaces de abrir auténticos procesos de reconstrucción republicana. La gran pregunta latinoamericana consiste precisamente en determinar cuáles de esas elecciones predominarán en los próximos años.

Democracia constitucional o cesarismo plebiscitario

La gran disputa latinoamericana ya no enfrenta simplemente izquierdas y derechas. Esa lectura resulta insuficiente. La tensión más profunda opone dos concepciones distintas del poder político. De un lado permanece la tradición republicana según la cual la autoridad debe estar limitada por el derecho, distribuida institucionalmente y sometida a controles permanentes. Del otro emerge una lógica plebiscitaria que identifica legitimidad con eficacia inmediata, liderazgo carismático y capacidad excepcional de decisión. La primera concibe la democracia como gobierno limitado. La segunda como encarnación directa de la voluntad popular en un líder. Esa tensión atraviesa hoy toda América Latina.

Y el problema no es únicamente institucional. Es también cultural. Durante años la región debilitó su educación cívica. La democracia fue reducida a procedimiento electoral. Se erosionó la idea de límite al poder. La política comenzó a organizarse alrededor de emociones inmediatas, polarización permanente y comunicación instantánea.

En ese contexto, amplios sectores sociales dejaron de percibir contradicción entre democracia y concentración de poder mientras el liderazgo conserve popularidad.

Allí aparece el riesgo del cesarismo plebiscitario: un régimen donde el líder concentra legitimidad simbólica, capacidad excepcional de decisión y representación emocional de la nación mientras las instituciones republicanas pierden densidad y autonomía.

Elecciones decisivas, democracias frágiles

Las elecciones que América Latina celebrará durante los próximos años serán importantes. Pero su relevancia no radica

únicamente en quién gane o pierda. Lo decisivo será determinar qué idea de legitimidad política prevalecerá después de ellas.

En algunos países dominará probablemente la lógica del orden y la seguridad. En otros persistirá el voto de castigo contra oficialismos desgastados. Continuará la fragmentación política. Seguirá creciendo la polarización. La influencia de factores externos aumentará todavía más.

Pero por debajo de todas esas dinámicas se desarrolla una discusión mucho más profunda: si América Latina seguirá creyendo en la democracia constitucional o si volverá a acercarse a una vieja tentación de su historia, la tentación de creer que el poder fuerte puede reemplazar a las instituciones. Tal vez allí resida la gran paradoja latinoamericana de nuestro tiempo: nunca la región había votado tanto y, sin embargo, pocas veces la democracia había parecido tan frágil, tan cansada y tan vulnerable frente a la promesa de autoridad sin límites.

Lucía Galeno

2026: Año electoral en América Latina. Perspectiva Histórica

El año 2026 es el punto de definición del llamado “ciclo electoral” latinoamericano a nivel presidencial, dadas las elecciones programadas en Costa Rica (realizadas en febrero), Perú (primera vuelta efectuada en abril, segunda en junio), Colombia (mayo y junio), Haití (agosto y diciembre); y Brasil (octubre), todo esto en un panorama caracterizado por la alta polarización, la fragmentación partidista y el debate en torno a temas clave como la seguridad, las reformas institucionales, oportunidades de progreso, entre otros.

El ciclo inició en 2025 con las elecciones de Ecuador, Bolivia, Chile y Honduras, en las que resultaron ganadores candidatos de tendencia opuesta a la izquierda, ya sean considerados de centro, derecha, conservadores o liberales. Estos resultados y las actuales tendencias —que llevaron a la presidencia en Costa Rica a la conservadora Laura Fernández y apuntan a la probable elección este año de otros candidatos de tendencia similar— auguran un posible predominio de la corriente conservadora, de derecha o liberal en el mapa político latinoamericano, de forma contraria a la izquierda dominante en el ciclo anterior.

No obstante, la historia política de América Latina desde el siglo XX se caracteriza por la consecución de etapas cíclicas que marcan una especie de tendencia influyente en la región, directamente ligada a las elecciones presidenciales, hecho considerado el principal acontecimiento de índole política, dada su capacidad de producir transformaciones. A fin de comprender esta evolución, es menester realizar una reconstrucción histórica que permita explicar el cambio político de estos países en el último siglo y examinar así su proceder ante la facultad del voto.

El camino previo a la democracia

En el paso del siglo XIX al XX, Latinoamérica experimentó una variación en sus dinámicas de poder que permitió el establecimiento de “regímenes oligárquicos”¹, dominados por la élite en el marco del positivismo, las cuales desplazaron las revueltas militares y golpes de estado como vía de ascenso presidencial, por elecciones censatarias e indirectas para legitimarse, acciones consideradas más civilizadas. Hacia los años 30 y 40, el surgimiento de partidos políticos y movimientos universitarios y obreros –de influencia marxista o anarquista– propició una apertura progresiva al sufragio lo que condujo a la masificación de la política y de la idea democrática. Al tiempo, en varios países las Fuerzas Armadas retornaron a la vida política con un discurso nacionalista y de reforma social y en abierta oposición al statu quo².

-
- 1 Marcelo Cavarozzi, “La construcción política de las sociedades latinoamericanas y su talón de Aquiles: el régimen político”, *Cuadernos del Ciesal*, año 11, N° 13, enero-diciembre 2014, p. 13.
 - 2 *Ibíd.*, pp. 18, 27 y 43. El autor analiza el caso de México con la presidencia de Lázaro Cárdenas (1934-1940), el de Brasil con Getulio Vargas (1930-1945), Argentina con el golpe de estado en 1930 y el ascenso de Juan D. Perón en 1943.

Terminada la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), surgieron corrientes nacional-populares que iniciaron la masificación de participación política, caso del primer ensayo democrático en Venezuela (1945-1948)³, mientras se probaban reformas económicas y sociales. No obstante, este proceso se detuvo durante la década de 1960 con la llegada de dictaduras militares de corte conservador y anticomunistas. Reflejo de las tensiones de la Guerra Fría, estos regímenes impusieron una férrea política represiva contra los movimientos populares y combatieron, en varios países, contra insurgencias guerrilleras de izquierda⁴. Fue a partir de 1980 cuando estos gobiernos autoritarios comenzaron a ceder ante una pujante ola democratizadora en Latinoamérica, coyuntura en el que se logró la firma de los acuerdos de paz en Centroamérica, región que había vivido desde finales de la década de 1970 una aguda crisis catalizada por el intervencionismo extranjero⁵.

La democratización y el orden global

La apertura democrática estuvo marcada por la lealtad a los partidos tradicionales y a líderes que habían luchado contra el autoritarismo. A partir de entonces, la historia política regional quedó ligada a la realización de elecciones, el gran símbolo del nuevo orden democrático que otorgó una identidad compartida al continente. Esta realidad se consolidó en la última década del

3 En este marco se observa la transición en Venezuela que llevó a la caída del Presidente Medina Angarita y el inicio del llamado Trienio Adeco, el primer ensayo democrático. Para profundizar en este tema, véase Allan R. Brewer-Carías, «Reforma electoral en el sistema político en Venezuela», en *Reforma política y electoral en América Latina 1978-2007*, coord. Daniel Zovatto y J. Jesús Orozco Henríquez, Universidad Nacional Autónoma de México, México, IDEA Internacional, 2008, pp. 953-1021.

4 Demetrio Boersner, *Relaciones internacionales de América Latina. Breve historia*, Editorial Nueva Sociedad, Caracas, 1996, pp. 216-224 y 236-241.

5 *Ibíd*, pp. 262-271.

siglo XX con el auge liberal tras el fin de la Guerra Fría y la preponderancia de los Estados Unidos en la era de la “globalización”. En el periodo anterior (los años 80), se había producido la “década perdida” de Latinoamérica —época de profunda crisis económica caracterizada por inflación, baja de precios de las materias primas y sobreendeudamiento— lo que también incidió en la adopción de fórmulas liberales como respuesta a la problemática. Los partidos políticos que promovieron la democratización y gestionaron reformas estatales se alinearon a los principios durante sus gobiernos, logrando mantenerse en el poder⁶.

En este tiempo se da la incursión de figuras ajenas al sistema político que conectaron con una sociedad descontenta, como evidenciaron las elecciones de Fernando Collor de Mello en Brasil (1989) y de Alberto Fujimori en Perú (1990); populismos nacionalistas que adoptaron recetas liberales. A partir de allí, con el ejercicio constante del voto masivo, directo y universal, visibilizó claramente el “efecto pendular”, característico de Latinoamérica. Éste se entiende como la tendencia histórica a experimentar virajes ideológicos y programáticos que fluctúan entre polos opuestos (izquierda y derecha, o liberalismo y estatismo), impulsados por coyunturas económicas e insatisfacción social⁷, un fenómeno que puede afectar no solo la orientación ideológica de los gobiernos, sino también, influir en reformas institucionales que revierten cambios previos en planes de desarrollo.

6 Salvador Romero Ballivián, “Elecciones en América Latina”, *IDEA Internacional*, Tribunal Supremo Electoral, La Paz, 2021, p. 256, <https://www.idea.int/publications/catalogue/elecciones-en-america-latina?lang=es>

7 Para profundizar en la dinámica pendular, véase Carlos Otto Vázquez Salazar, “El péndulo político en América Latina: nuevo ciclo progresista y auge de la derecha en la región”, en *Reflexiones críticas sobre ideología y dominación: un debate abierto volumen*, Comunicación Científica, México, 2025, p. 93.

El viraje hacia la izquierda: la “marea rosa” (1999-2014).

El nuevo milenio reveló el deterioro de las condiciones económicas de los países latinoamericanos, lo que minó la popularidad y legitimidad de los gobiernos y partidos liberales de los años 90 y generó un punto de inflexión histórico: por primera vez, triunfó una mayoría de gobiernos de izquierda ante la exigencia por el electorado de nuevas fórmulas. En los casos en los que esta corriente se había mantenido dentro de la institucionalidad, el giro respetó el marco político y económico preexistente, enfocándose al fortalecimiento de la política social. Destacan los ejemplos de Brasil con Lula Da Silva (2003), Chile con Ricardo Lagos (2000) y Michelle Bachelet (2006); y Uruguay con Tabaré Vázquez (2005), consolidando así, un modelo de alternancia entre derecha (o liberal) e izquierda.

Contrariamente, donde el poder continuó en manos de los partidos tradicionales, el electorado buscó relevo fuera del sistema y propició el triunfo de figuras independientes que prometían la refundación total del Estado y de la sociedad, con las subsiguientes consecuencias. Los casos más representativos fueron el ascenso del Chavismo en Venezuela (1999), Evo Morales en Bolivia (2006) y Rafael Correa en Ecuador (2007), líderes que impulsaron asambleas constituyentes⁸. Luego, al perder popularidad, estos gobiernos emplearon las reformas institucionales previas para desarrollar rasgos autoritarios y asegurar su permanencia.

La primera “marea rosa” —ola de gobiernos de corte progresista o de izquierda— se desarrolló en un escenario inédito

8 El caso de Nicaragua resulta particular porque al asumir la presidencia en 2007, Daniel Ortega mostró moderación, pragmatismo bajo la idea de la reconciliación nacional. Posteriormente, a partir de 2009, experimentó una mutación progresiva con elementos autoritarios.

electoral en América Latina⁹. Se realizaron doce elecciones presidenciales entre noviembre de 2005 y diciembre de 2006: Honduras, Haití, Bolivia y Chile, en 2005; y Costa Rica, Perú, Colombia, México, Brasil, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, en 2006. El progresismo se impuso en 7 países y perdió en 5: en Honduras (aunque Manuel Zelaya luego daría un giro a la izquierda), Costa Rica, Perú, Colombia y México.

El retroceso de la izquierda (2016-2019)

Los casi quince años de predominio de los gobiernos de izquierda en la región contaron con un importante crecimiento económico impulsado por el alza de los precios de las materias primas; sin embargo, una vez superada esa coyuntura, las economías se contrajeron y los Estados redujeron considerablemente la inversión social, generando malestar en la población. Asimismo, el factor corrupción fue enfatizado por escándalos transnacionales como el caso Odebrecht, lo que influyó en el voto y produjo un movimiento pendular hacia la derecha liberal. Son ejemplos las victorias de Mauricio Macri en Argentina (2015), Pedro Pablo Kuczynski en Perú (2016), Sebastián Piñera en Chile (2017) e Iván Duque en Colombia (2018). Este ciclo cerró en 2018 con la elección de Jair Bolsonaro en Brasil, cuyo discurso de ruptura capitalizó la crisis y el descontento social después de años de dominio del Partido de los Trabajadores, y concluyó con la victoria de Luis Lacalle Pou en Uruguay (2019).

9 Aude Argouse, Elizabeth Burgos, coords., "Elecciones en América Latina. Una perspectiva histórica", dossier en *Nuevo Mundo Mundos Nuevos, OpenEdition Journals*, 2007, introducción, p. 1, <https://journals.openedition.org/nuevomundo/3526>

Crisis y efecto pandemia (2018-2020)

Entre 2018 y 2019, la inconformidad se profundizó con los resultados de los gobiernos de cualquier tendencia. México dio un giro a la izquierda en 2018 con la victoria de Andrés Manuel López Obrador, quien prometió una transformación del sistema tradicional, mientras que en El Salvador aparece Nayib Bukele (2019), una nueva figura de gran popularidad que rompió el bipartidismo histórico. Por su parte, en la región andina reinó la inestabilidad con la crisis de Bolivia (2019) —luego de la anulación de las elecciones y la renuncia obligada de Evo Morales— y el estallido social en Chile de 2019 que derivó en un proceso constituyente cuya carta magna no logró la aprobación del voto.

Seguidamente, la pandemia del COVID-19 en 2020, el cual actuó como un acelerador de las crisis preexistentes y orientó al elector al “voto de castigo” que tomó rasgos sistemáticos, ya que se consolidó una tendencia donde los electorados condenaron a la derrota a los oficialismos sin importar su signo ideológico. Entre 2019 y 2022, casi todos los presidentes que buscaron la reelección o la continuidad de su partido fracasaron, con la notable excepción de regímenes considerados no democráticos en los que el orden constitucional desapareció y, con ello, se anuló la posibilidad de celebrar elecciones libres y transparentes con la persecución y exclusión de la oposición (Venezuela, Nicaragua). La fragmentación política fue otra de las características principales de este periodo de indefinición.

La alternancia y la falta de credibilidad generalizada (2021-2024).

Las elecciones de 2021 significaron el inicio de un ciclo electoral intenso cuyas tendencias generalizadas fueron: el “voto castigo” contra el gobierno de turno, como predisposición —ya

sistemática— del electorado y la hiperpolarización, con escenarios electorales divididos en dos mitades enfrentadas y una notable hostilidad. La heterogeneidad ideológica también está presente, dado que, aunque al principio de este período se eligen gobiernos de izquierda, en la segunda mitad, el efecto pendular se mueve hacia candidatos de la derecha o liberales. La segunda «marea rosa» sumó a Pedro Castillo (Perú), Gabriel Boric (Chile) y Xiomara Castro (Honduras) en 2021; Gustavo Petro (Colombia) y Lula da Silva (Brasil) en 2022; Bernardo Arévalo (Guatemala) en 2023; y Claudia Sheinbaum (México) junto a Yamandú Orsi (Uruguay) en 2024. En contraste, la derecha triunfó con Guillermo Lasso (Ecuador, 2021-23), Javier Milei (Argentina, 2023), Nayib Bukele (El Salvador), José Raúl Mulino (Panamá) y Luis Abinader (República Dominicana) en 2024.

Elementos característicos de los procesos electorales de América Latina

La reconstrucción histórica de los ciclos electorales permite precisar rasgos definitorios de la dinámica política latinoamericana que inciden directamente en el electorado y en los resultados de estos procesos, tal y como se espera que continúe en el año 2026 para completar el ciclo electoral iniciado en el 2025. Al respecto, lo primero que debe señalarse es que las presidenciales son las elecciones de mayor relevancia, las cuales captan la atención y concurrencia del país al reflejar las expectativas y preocupaciones de la población, de allí su importancia en cuanto al nivel de participación política.

Si bien los ciclos electorales anteriores han mostrado inclinación hacia una u otra tendencia política, en la que algunos países parecen guiar al resto, no existe uniformidad debido a la presencia de casos particulares desalineados y que responden a las circunstancias propias de cada nación. Por el contrario, es evidente el

debilitamiento político de los partidos de centro debido al colapso de sus estructuras ante las crisis sobrevenidas desde los años 90, lo que pareciera mantenerse en un contexto cada vez más polarizado en el que los extremos pueden conducir a la concentración de poder, independientemente de la ideología.

Los ciclos electorales de la región han estado fuertemente influenciados por el contexto económico: si existe bonanza, es altamente probable la continuidad del gobierno, en caso contrario, se busca la alternativa opuesta. Esto está íntimamente relacionado con la vulnerabilidad económica estructural de los países, de recursos limitados y expuestos a cambios en la economía internacional, lo que incita la volatilidad electoral. Así se observa que, de 134 elecciones presidenciales realizadas en el subcontinente desde finales de los años 80, 77 resolvieron un cambio del partido (57,4%) y en 57 triunfó el oficialismo (42,5%)¹⁰, mientras que los ciclos políticos se han ido acortando ante la tremenda dificultad de los gobiernos para mantener la confianza ciudadana a largo plazo.

Influye también el personalismo, debido a que los partidos dependen del carisma y popularidad de los líderes, más allá de las ideologías y las instituciones, situación reforzada por el presidencialismo, que otorga ventajas para la posible reelección. Al respecto, hasta 2020, más del 90% de los presidentes latinoamericanos que buscaron la reelección resultó triunfador¹¹.

Reflexiones finales acerca del panorama electoral 2026

Al examinar el mapa de América Latina en el año 2026, partiendo de los resultados del 2025 que señalan un resurgimiento de los gobiernos de derecha o liberales, en un efecto pendular,

10 Romero Ballivián, "Elecciones en América Latina"..., p. 258.

11 *Ibíd.*, p. 260.

pareciera que por los momentos no es posible pensar en proyectos políticos duraderos ni en lealtades ideológicas. Más que corrientes políticas, ante la frustración y el cansancio, los ciudadanos se inclinan por soluciones rápidas y contundentes a sus problemas, mediante fórmulas que podrían ser cuestionables desde una perspectiva democrática y que podrían derivar en autoritarismos legitimados por elecciones.

Este año, se ha producido el triunfo del conservadurismo en Costa Rica, pero el peso de lo que falta por decidirse en los próximos meses es determinante para el equilibrio regional. En Perú, la crisis institucional que lo ha caracterizado durante los últimos 10 años, ha puesto en tela de juicio las elecciones en primera vuelta, con el desconocimiento de los resultados por uno de los candidatos, lo que resalta uno de los problemas más importantes del actual contexto político latinoamericano: la falta de credibilidad en los procesos electorales y en la democracia, hecho reflejado en el alto porcentaje de votos nulos o en blanco en la elección. Las encuestas hasta mayo, señalan paridad entre Keiko Fujimori (derecha) y Roberto Sánchez (izquierda).

En una Colombia polarizada, los comicios de mayo y junio definirán si continúa el progresismo de Iván Cepeda —sucesor de Petro que enfrenta fuertes resistencias institucionales— o si retorna el conservadurismo. Cepeda parte con ventaja frente a una derecha dividida entre Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia; por ello, la posible unión de la oposición en segunda vuelta será el factor crucial para intentar superarlo.

Por su peso político y económico, Brasil es el proceso geopolítico más relevante. En octubre, bajo una alta polarización, los ciudadanos elegirán entre la continuidad de Lula o la oposición conservadora de Flávio Bolsonaro. Un cambio de corriente consolidaría un giro contundente al conservadurismo en la región; de

mantenerse el oficialismo, la izquierda retendrá su bastión estratégico en una Latinoamérica marcada por la división.

Finalmente, resulta improbable una tendencia uniforme en América Latina, dada la continuidad de la izquierda en México y sus posibilidades en Colombia y Brasil. También es clave considerar cómo el conservadurismo estadounidense —factor externo pero influyente en la región— podría incidir en un panorama regional que le resulte afín.

La evolución política señala que la región pasó de luchar por el derecho al voto a ejercerlo con un fuerte cuestionamiento a la legitimidad del sistema y sus instituciones. Ante la crisis, el gran reto de las democracias latinoamericanas es consolidar proyectos nacionales de desarrollo basados en la solidez institucional, más allá de las ideologías de turno.

Jesús E. Mazzei Alfonzo

Brasil perspectivas electorales

Contexto

Este año, Brasil, se dispone a celebrar unas elecciones importantes que definirán el rumbo de su democracia y el devenir político y económico para los próximos años —entrando al primer tercio de este siglo XXI—. Digo esto por varias razones: en primer lugar, por lo complejo del panorama geopolítico regional latinoamericano de movida del péndulo político e ideológico —de una marea rosa no tan radical a la derecha—; en segundo lugar, por las consecuencias del acuerdo Mercosur-UE, en cuanto a las políticas arancelarias de Donald Trump, y las repercusiones en el comercio birregional en ambas zonas económicas. Y además, por el complejísimo panorama desde el punto de vista geopolítico internacional, del Medio Oriente con una pausa y tregua frágil en el conflicto que hace impredecible si habrá una estabilización política-militar entre los principales actores involucrados —Estados Unidos, Israel e Irán—, que repercutirá en el comercio interregional y birregional, y posteriormente en el precio y volumen del petróleo, gas y materia primas.

Adicionalmente, el bloqueo afectó significativamente el abastecimiento de otros derivados asociados a la cadena del petróleo

y el gas, como fertilizantes nitrogenados, helio y azufre, que son comercializados en esta zona del mundo y pasan por el estrecho de Ormuz, lo que impide el transporte de aproximadamente el 19% de la oferta global de petróleo y el 20% de la de gas natural licuado (GNL). Incluso con la continuidad del alto al fuego anunciado el 7 de abril, la reanudación de las operaciones de producción de petróleo, gas y derivados en algunos países y la recuperación de los flujos de transporte puede llevar meses hasta que se normalicen las actividades.

Por otra parte, ya ciñéndonos al panorama político brasileño, serán las últimas elecciones donde Luis Inácio Lula da Silva participará como candidato, lo que entraña un desafío para la izquierda brasileña y —en concreto sobre su rol sin Lula en el futuro— y la estructuración del relevo generacional del liderazgo de carácter colectivo partidista del PT. La izquierda, la derecha y el centro político deberán plantearse por un lado, las indefiniciones político-electorales por la profunda y excesiva polarización y fragmentación existentes en el actual panorama político brasileño, que ha engullido prácticamente al centro político, representado otrora por el PFL, PMDB, PSD y el PSDB, con tiene líderes individuales importantes, pero sin la fortaleza y peso partidista de antes, dentro de la dinámica del sistema político brasileño. Y, por último, la reconfiguración de la coalición presidencial, para el próximo mandato es un elemento a tomar en cuenta y también que las últimas pesquisas muestran un empate técnico entre Lula y Flavio Bolsonaro¹ (1) y qué repercusiones tiene esto en el, aún no iniciado formalmente, proceso electoral brasileño.

1 Lucas, “Lula e Flávio Bolsonaro empatam em pesquisa Quaest para 2026”, Correio Brasiliense, Aqui, 10/04/2026, <https://www.correiobraziliense.com.br/aqui/2026/04/10/lula-e-flavio-bolsonaro-empatam-em-pesquisa-quaest-para-2026/>

Esta última contextualización y caracterización, es importante dado toda esta circunstancia que redefinirá lo que los politólogos brasileños denominan **la coalición presidencial**. En el Congreso Nacional el apoyo legislativo al gobierno le ha dado soporte político a todos los gobiernos surgidos en las urnas brasileñas desde la redemocratización en 1985. Y por supuesto, el próximo período cuatrienal de gobierno, que se inicia el 1ero de enero de 2027, reforzará aún más esta tendencia: la necesidad de formar una coalición de gobierno interpartidista, sea que Luis Inácio da Silva sea reelegido, o gane Flavio Bolsonaro.

El otro aspecto que deseo analizar es la alta polarización, en la ruta que lleva al escenario electoral entre la derecha —representada por el partido Liberal y sus aliados y el PT— y la coalición tanto electoral como de gobierno que apoya a Lula en esta nueva campaña electoral, que será la última de Lula como candidato y que tendrá fuerte influencia en el devenir de la izquierda y los partidos de centro izquierda del Brasil. Esto indudablemente va tener que ver con cómo se muevan las tendencias y la intención de voto, por ejemplo, en el centro norte y norte del Brasil, con bastiones tradicionales y naturales de los votos de la izquierda, y cómo se moverán también, tomando en cuenta que la región sur y sur-este, han sido en el pasado baluartes del centro y la derecha-liberal democrática; en el este están los puntos de apoyo de una candidatura mayoritaria de la oposición y aquí está el gran desafío, por ejemplo, de los contendientes de Lula, que si llegan fragmentados y divididos en dos opciones en la primera vuelta de octubre, verán mermadas sus posibilidades de derrotar a Lula y este podría triunfar en la primera vuelta, si no tienen una única candidatura presidencial que rete al liderazgo de Lula en forma concreta y fortaleza política.

Lula ha afirmado, que en un eventual cuarto mandato llevará definitivamente al Brasil, a un nivel de país desarrollado, ya que

los primeros dos años de su tercer mandato, fueron destinados a reconstruir la obra hecha por los primeros mandatos del PT, a reconstruir y rehacer la obra hecha por Lula y Dilma Rousseff, afectado por la gestión gubernamental de Jair Bolsonaro (2019-2023).

En ese mismo orden de ideas, el centro político puede desaparecer del espectro político-electoral brasileño, por eso, será crucial el rol de los líderes del Partido Social Democrático (PSD) y Partido Social Demócrata brasileño (PSDB), Gilberto Kassab con ministros en el gobierno federal y paulista y Aécio Neves, en tratar de reposicionar el centro político en Brasil, y buscar influenciar o mover la candidatura de Lula en un giro más hacia el centro. En ese sentido, el PSDB, por intermedio del Presidente del Partido, Aécio Neves, invitó recientemente a Ciro Gomes a liderar una oferta política para las elecciones de octubre del centro político. Está por verse la fuerza política y electoral en las encuestas de los próximos meses y qué partidos estarían dispuestos a acompañarla, o Tarcísio de Freitas gobernador de Sao Paulo se lanza, y tiene más posibilidades de victoria que Flavio Bolsonaro, veremos, ya que hasta los momentos todavía no ha tomado una decisión definitiva.

Otro elemento a tomar en cuenta, es la esposa de Jair Bolsonaro, Michelle Bolsonaro con peso en el voto femenino, al ser ella mujer y militante activa de la iglesia cristiana evangélica neopentecostal, elemento que está jugando un aspecto importante en las últimas elecciones. El factor religioso y el sector electoral asociado, para el bolsonarismo, es un actor de peso con el que hay que contar y negociar².

2 Correio Brasiliense, "Pesquisa indica empate de Lula e Flávio Bolsonaro no 2º turno", Pesquisa Eleitoral, 8 de abril de 2026, <https://www.correio-brasiliense.com.br/politica/2026/04/7392809-pesquisa-indica-empate-de-lula-e-flavio-bolsonaro-no-2-turno.html>

A esto se debe agregar un elemento adicional, el precedente en el escenario político brasileño: la ola de descontento que tuvo como caldo de cultivo las denuncias e investigaciones sobre actos de corrupción que involucraron a gran parte de líderes del sistema político brasileño, en especial del Partido de los Trabajadores (PT), el Movimiento Democrático Brasileño (MDB), el Partido Progresista (PP) y el Partido de la Social Democracia Brasileña (PsdB). Los dos principales casos de corrupción, el llamado Mensalão y la operación Lava Jato, destaparon una explosiva caja de pandora, que abrió la emergencia al bolsonarismo como movimiento político, luego del año 2016 y que aún hoy influencia el panorama político-electoral brasileño.

Aquí va jugar un rol fundamental el PMDB, PSD y el PSDB, dado que se observa una fuerte debilidad y fragmentación y a los que giran alrededor de la derecha y el centro derecha, ya que es un hecho la consolidación de Flavio Bolsonaro como el candidato del PL, y partidos asociados ya que fue bendecido por su padre Jair Bolsonaro quien está inhabilitado de hacer política, y no sabemos aún si Tarcisio de Freitas, gobernador de Sao Paulo, va a aspirar también a ser candidato presidencial, por parte de los sectores económicos, financieros del Brasil, que lo ven con buen ojo, dado el peso económico y político, del eje; Minas Gerais-Goiás-Sao Paulo-Rio de Janeiro en las elecciones del Brasil, como principal centro motor político-económico de ese país y principal centro electoral del Brasil.

Asimismo, aparecen también en la escena electoral de la derecha candidatos identificados claramente con Bolsonaro, pero con menos posibilidad competitividad electoral los gobernadores Ronaldo Caiado (GO), Ratinho Júnior (PR) e Romeu Zema (MG), como se puede observar la derecha debe clarificar lo más pronto posible su candidatura, que de acuerdo a nuestra modesta apreciación deben presentar una candidatura única, que ya se aglutina

cada vez más alrededor de Flavio Bolsonaro, para tener alguna posibilidad de derrotar a Lula; esta tendencia aparentemente se disipó y fortaleció, con la subida en las encuestas de Flavio Bolsonaro en estos últimos dos meses, que lo hacen el candidato único de la derecha y oposición del Brasil.

Es probable, que surja una tercera opción con fuerza, representado en este caso por el partido PSDB, que aparentemente perdió su mercado electoral, con el proceso de succión de la candidatura de Bolsonaro en las elecciones donde este resultó triunfante, en el año 2018. Tienen un gran líder, Aécio Neves, con gran proyección nacional, pero limitado al alcance partidario de su sigla partidista. Esta posibilidad estimo que también desapareció del panorama electoral brasileño, por la inviabilidad político-electoral y la irrelevancia, mostrada en los principales estudios de opinión.

Temas

Los *issues* de campaña de la derecha aparentemente girarán en torno a los temas de seguridad —recordemos la mega operación en la ciudad de Río de Janeiro sobre las bandas criminales y de narcotráfico—; otro tema importante será, el crecimiento económico, que no ha tenido un efecto multiplicador. Lula, la influencia del crecimiento de la inflación ocasionada por el aumento del combustible, dada la subida de precio del diésel y la gasolina, al interno de la economía brasileña ocasionada por la guerra del medio oriente que está afectando la comercialización y el nivel del precio de petróleo fundamentalmente el precio de referencia Brent, y que se implementen medidas que amortigüen el impacto interno en el precio de bienes y servicios de la población brasileña.

Por otro lado, a su vez, intensificará la discusión y debate sobre los temas de campaña en torno a la calidad y gobernabilidad de la democracia brasileña hacia el futuro y su valor intrínseco

dado los episodios y condenas a los intentos golpistas de enero del 2023, el programa Pé-Media y la exención del impuesto de la renta a quien gana hasta 5.000 reales, y del efecto multiplicador que este produce en importantes sectores sociales, además, de las positivas acciones internacionales de Lula en su política exterior, que han calibrado la posición de un país desde el punto de vista internacional, que busca un mundo más justo, donde la negociación sea el pivote de las relaciones internacionales y la diplomacia multilateral juegue un papel más activo y no el unilateralismo de las grandes potencias, jugar un rol más activo de Global Player.

Por otra parte, Lula tiene un desafío importante: Geraldo Alckim ¿será su compañero de fórmula? o buscará otra alternativa, dada la importancia de tener candidatos de fuerza para recuperar el liderazgo en la cámara del Senado, esto se dilucidó en el mes de abril, cuando se definió definitivamente que Alckim será su compañero de fórmula y se realizó una reorganización ministerial.

En ese mismo orden de ideas, esta es un interrogante que sabremos en los próximos días su resultado, porque hay que conformar, por una parte, el comando político de campaña y por la otra, la prosecución del equipo de gobierno para mantener el ritmo de la acción de gobernar, cuyo balance este año será vital, para un resultado favorable o no a la candidatura de Lula en las elecciones de octubre en la primera vuelta.

Un actor muy importante en las modernas campañas electorales será el rol de las redes sociales, el uso de la inteligencia artificial, por las distintas candidaturas en su estrategia de comunicación y posicionamiento de los diferentes temas de campaña electoral. No debemos olvidar que Brasil va elegir nuevo parlamento, nuevos gobernadores y que se entrecruzarán las elecciones

regionales con la elección nacional, por ello el comportamiento de cómo se mueva este factor será fundamental.

La combinación entre polarización política y medios televisivos, redes sociales, continuará siendo un elemento central del proceso electoral de este año ya que atizará aún más la polarización y el debate de los diferentes *issues* de campaña, y será muy explotado por los partidos contendientes. Se cruzarán temas políticos, económicos, internacionales, los diferentes conflictos geopolíticos. Hay una racionalización personaliza de la política brasileña en concreto en la política brasileña

Otro elemento a tomar en cuenta, es el giro político de América Latina, que ha girado de gobiernos de izquierda moderados a gobiernos de derecha el último año, de 16 democracias nueve han girado hacia la derecha, veremos entonces cómo esto repercute en este año 2026, en las elecciones en Perú y Colombia, al interno de cómo se mueva el comportamiento electoral brasileño, ya que el desafío de la derecha brasileña es convertir el valioso capital simbólico de Jair Bolsonaro, en viabilidad electoral concreta, esto es pasar el capital de Bolsonaro a su hijo y ello va depender, mucho por una parte por la capacidad e inteligencia política, de Flavio Bolsonaro, si es el candidato único de la derecha y de construir puentes con el centro político para presentar un proyecto competitivo en un escenario político muy abierto u otra alternativa como mencionamos en los párrafos anteriores. También veremos si factores externos podrán influir en el desarrollo electoral brasileño (Donald Trump y los presidentes de derecha de América del Sur).

Conclusión

Como podemos observar un escenario político-electoral, interesante y altamente desafiante para apreciar y captar adecua-

damente, cómo se moverán las distintas tendencias políticas-electorales próximamente, hoy todas las encuestas muestran y dan una fotografía, donde la primera opción la tiene Lula, veremos si esta foto se mantiene y consolida, en los diferentes escenarios que se dibujan, muestran ahora una victoria de Lula, es probable, pero un panorama incierto cuando corra en firme la campaña electoral y se juzgue el desempeño del gobierno en un ambiente complejo tanto desde el punto de vista interno, como externo, a los largo del tiempo de una campaña electoral que se espera sea áspera, por ello, falta aún muchos meses por delante para que se desarrollen los acontecimientos³.

Esta es una aproximación preliminar hecha en este cuatrimestre de este año, en que Brasil mostrará la fuerza y solidez, de un sistema democrático consolidado y fuerte, después de más de 40 años de democracia, la cual se ha estabilizado y consolidado a lo largo del tiempo, mostrándose al mundo como una democracia modélica, con capacidad de adaptación a cada circunstancia político.

Tres rasgos muestran las encuestas al momento de escribir y culminar este artículo, sobre las perspectivas electorales del Brasil. Por una parte, consolidación de una candidatura de derecha, reduciendo el espacio para candidaturas de centro político como el PSDB, u otras opciones, y se refuerza la polarización política entre el Partido de los Trabajadores y el Partido Liberal (que aglutina a la mayor coalición de oposición) y, además, un rechazo de Lula del más del 50,6%, poco apoyo en el determinante sector de votantes del sur del país y asimismo, escaso apoyo en los secto-

3 Correio Brasiliense, "Datafolha: Lula empata com Flávio e disputa aumenta no 2º turno", 11 de abril de 2026, <https://www.correiobraziliense.com.br/politica/2026/04/7395711-datafolha-lula-empata-com-flavio-e-disputa-aumenta-no-2-turno.html>

res medios de la población que son determinantes en este espacio geográfico del país el sur-este⁴, lo que refuerza aún más la polarización, por lo que se prevé unas elecciones muy competitivas y cerradas, probablemente en su resultado electoral en octubre, debido el crecimiento sostenido de Bolsonaro en los últimos meses de inicio de este año y Lula aunque mantiene el primer lugar, no puede subestimar a la oposición, y tener una apreciación errónea desde el punto de vista estratégico, del escenario político electoral brasileño en los próximos meses.

Por ello, algunas encuestas, como la de CNT, manifiestan que hay un escenario indefinido a pesar de la preferencia a Lula en primer lugar en torno a un 28,7%, pero con una tasa de indecisos del orden 38,6% y Flavio Bolsonaro con 16,6% y un margen de ventaja en la segunda vuelta del 4%, de 44,9% contra 40,2% de Flavio Bolsonaro⁵.

Finalmente, una encuesta de la Genial/Quaest, muestra por primera a Flavio Bolsonaro, por delante de Lula, en las intenciones de voto, no obstante, la encuesta manifiesta la tendencia a un empate técnico en la segunda vuelta, veremos si en los próximos meses esta tendencia y brecha, se mantiene o se rompe a favor de uno de los dos candidatos⁶.

4 Eduarda Esposito, “Rejeição de Lula atinge 50,6%, mostra pesquisa de opinião”, *Correio Brasiliense*, 3 abril de 2026, <https://www.correio-brasiliense.com.br/politica/2026/04/7390044-rejeicao-de-lula-atinge-506-mostra-pesquisa-de-opinio.html>

5 Confederação Nacional do Transporte, “Levantamento CNT/MDA mostra disputa em formação e amplia temas do debate público”, 14 de abril de 2026, <https://cnt.org.br/agencia-cnt/levantamento-cntmda-mostra-disputaem-formao-e-amplia-temas-do-debate-pblico>

6 La encuesta publicada por Genial/Quaest el miércoles 15 de abril muestra al presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) liderando la primera vuelta electoral (37%), seguido por el senador Flávio Bolsonaro, del PL, con el 32%. Ronaldo Caiado (PSD) se sitúa en tercer lugar (6%).

En ese mismo orden de ideas, esto se observa con claridad meridiana en una reciente entrevista a Lula Da Silva concedida a El País de España en Brasilia, en el Palacio de Planalto, donde expresa diversas ideas sobre Bolsonaro, la idea de la democracia en Brasil, la reconstrucción del país y que busca en la contienda electoral tratar de atraer al elusivo centro político para despolarizar el ambiente electoral brasileño y que será definitorio en las elecciones de octubre 2026:

—En octubre hay elecciones presidenciales en Brasil y las encuestas apuntan a un empate con el bolsonarismo. ¿Cómo explica que conserve tanta fuerza después de una tentativa de golpe de Estado y de alentar la injerencia de Estados Unidos?

—El bolsonarismo no volverá a gobernar este país porque el pueblo prefiere la democracia. Tengo esa convicción. Y el hecho de que la sociedad brasileña esté más dividida no es novedad tampoco. Nunca gané una elección en primera vuelta. Y el mundo se ha polarizado aún más; la extrema derecha gana cuerpo con un discurso mentiroso y negacionista, utilizando las redes digitales como nunca antes, y ahora con ayuda de la inteligencia artificial. (...)

—¿Y de dónde le viene a la ultraderecha tanta fuerza? ¿No puede haber otras causas, como un desencanto con lo que ofrecen las democracias modernas?

—La democracia le debe ahora al pueblo una explicación, porque la democracia no es solo recibir el voto el día de

Sin embargo, en la simulación principal de la segunda vuelta, Flávio Bolsonaro aparece con el 42% de la intención de voto. Esta es la primera vez que el hijo del expresidente Jair Bolsonaro supera numéricamente a Lula, que cuenta con el 40%. No obstante, técnicamente ambos siguen empatados.

Genial/Quaest, “Tendência de piora na avaliação do governo Lula ainda não foi revertida”, Abril 2026, <https://quaest.com.br/lps/pesquisa-genial-quaest-abril-2026/>

la elección, hay que demostrar que se va a trabajar mejor, ganar más, comer mejor, tener más acceso a la cultura y a la educación... Si no lo hacemos, ¿por qué el pueblo va a creer en la democracia? Tenemos la obligación de demostrar a la humanidad que es mejor que el autoritarismo. Nuestro problema es que empezamos a darnos cuenta tarde de que falló en la construcción del llamado estado de bienestar, en la educación, en la salud... Por eso voy a Barcelona a participar en el Foro Democracia Siempre con presidentes y ministros de América, Europa, África y Asia...⁷

7 Jan Martínez Ahrens, Naiara Galarraga Gortázar, "Lula: «Trump no tiene derecho a levantarse por la mañana y amenazar a un país»", *El País*, Brasilia, 15 de abril de 2026, <https://elpais.com/america/2026-04-16/lula-trump-no-tiene-derecho-a-levantarse-por-la-manana-y-amenazar-a-un-pais.html>

Rommer A. Ytriago F.

***Veni, vidi, vici*: Donald Trump, realismo político, América Latina y desorden multipolar**

Ha pasado poco más de un año, desde que inició la “era dorada de Estados Unidos de América”, como Donald Trump ha descrito a su segundo mandato. Sin embargo, esto exige precisión no solo desde la perspectiva del Estado que dirige, sino también en clave del estadista: no es menor afirmar que ha vuelto, ha visto y ha vencido –*veni, vidi, vici*–, como reza la locución latina, frente a las narrativas dominantes que profetizan el declive de su país, su hegemonía, su dominio y su primacía en un sistema internacional marcado por el desorden, la anarquía y una profunda crisis de valores que afecta a todo orden basado en reglas. Contrariamente a las predicciones del desastre, la política exterior de Trump ha exhibido un éxito rotundo, aun cuando algunos insistan en leer como derrotas lo que, en muchos aspectos, constituyen ajustes estratégicos. Sostener una lucha política dentro del marco de las ideas conservadoras, manejarse en un hemisferio con unidades políticas problemáticas como las presentes en América Latina e intentar liderar al “mundo libre”, al Occidente cristiano, requiere no solo ideología, sino también realismo y pragmatismo. En ese sentido navegan las siguientes páginas: no se trata de una defensa apologética de Trump, sino de un intento por ubicar analíticamente al

máximo líder de la tierra dentro de un tablero internacional en desorden, y por trazar las líneas de fuerza que su proyección exterior realista está imponiendo en el hemisferio, particularmente en América Latina.

Descriptor: Política Exterior, Realismo Político, Seguridad Hemisférica, América Latina, Desorden Multipolar.

I. El diagnóstico necesario: las lógicas de Trump.

Desde que el presidente Donald. J. Trump tomó posesión para su segundo mandato, las miradas de seguidores y detractores se han centrado en la forma como ha reanimado eso que los internacionalistas denominan “realismo político”, que ha permitido centrar el debate de la política exterior que Estados Unidos de América debe ejercer frente a la que ha ejercido, no operando esta vez como un recurso ocasional, sino como un marco interpretativo —central— para comprender las relaciones de poder en el hemisferio occidental.

Este rescate a un viejo enfoque de política exterior, no parece ser descabellado, y —tal como definiera Hans Morgenthau— es consciente del imperativo moral, pero entiende que los Estados, en su interacción, se mueven indefectiblemente conforme al interés nacional definido en términos de poder.

Hasta el gobierno de Joe Biden, interpretar bajo las ideas descritas la política exterior —haciendo la salvedad del primer mandato de Trump—, radicaba en una utilidad circunstancial, de modo que el realismo solo era —y nada más— una salida optativa, porque existía una concepción y preferencia —casi absoluta— por la cooperación ilimitada, en una especie de configuración internacional de “sociedad de la mutua ayuda”, para promover orga-

nismos multilaterales —de distintas índoles— que “suponían” asegurar la expansión de la democracia en el tablero global.

Quizás, esa versión pasada del ejercicio de la política exterior y el manejo de la política internacional, es lo que tanto se ha criticado a Occidente, pensar e interpretar la realidad internacional a través de mapas geográficos y mentales lo suficientemente sesgados y que a la postre requieren mucho más pragmatismo para comprender la política internacional que el siglo XXI va presentando.

No en vano es que se diga que Trump hoy día encarna una versión 2.0 de esa tradición, la cual exige que no se le evalúe fuera de esta cualidad, evitando someterlo peyorativamente a la crítica constante de que no es un hombre de política sino de negocios.

Desde E. H. Carr, pasando por Hans Morgenthau hasta Kenneth Waltz, se enfatiza el carácter anárquico del sistema internacional y cuya prioridad no son más que los intereses nacionales sobre los valores abstractos¹, esto supone que el argumento realista no se basa en un “moralismo frío”, como pretenden explicar sus críticos, sino de una lectura que subordina la justicia y la solidaridad a la existencia de un orden estable y a la capacidad de los Estados para garantizar la seguridad de sus sociedades.

En la lógica mencionada, el poder ejercido por Trump no viene a ser un fin en sí mismo, sino por el contrario, el medio necesario para preservar la integridad del Estado que dirige —el *Imperium sine fine*—, su estabilidad interna y plena autonomía.

1 Bueno es reconocer que en los casi 30 años que tiene el siglo actual, la democracia como valor central se ha diluido, por sus propias imperfecciones, pero también por sus muy variadas acepciones, algo que en el pasado siglo era casi impensable, por la solidez del criterio que la definía.

Importante es mencionar que actores externos con diferentes características se presentan para desafiar en términos atómicos, económicos, energéticos y tecnológicos a las grandes potencias, por lo que, el realismo reaparece más por el hecho de ser una respuesta a la crisis de la política exterior liberal, que es -cada día más- percibida como ingenua, desgastada y, en muchos casos, contradicha por los resultados concretos en el terreno².

En esta circunstancia, la política exterior de Trump plasma una relectura del realismo de forma clara y contundente, que tiene un énfasis en desplazar la “cooperación por el solo hecho de cooperar” a la cooperación condicionada³, guiada por consideraciones de seguridad, estabilidad y alineación de intereses.

Una demostración es lo que está ocurriendo con la OTAN⁴, donde importan las fronteras, la soberanía y la defensa de la estabilidad del Estado en su juego de doble nivel como caracterizaría

-
- 2 Un ejemplo reciente de la crisis del idealismo liberal ha sido la incapacidad de la administración Biden para disuadir los focos de conflicto global, permitiendo la prolongación del conflicto en Ucrania bajo la figura de guerra por delegación (proxy war), la pérdida de tracción diplomática frente a la asertividad de China en el Estrecho de Taiwán y la desestabilización del Medio Oriente.
 - 3 Cabe destacar que bajo una supuesta “tolerancia democrática”, actores como el crimen organizado transnacional y las potencias euroasiáticas se consolidaran en la región. En ese sentido, La condicionalidad de Trump no es un capricho ideológico, sino un incentivo pragmático: EEUU ofrece seguridad y acceso al mercado a cambio de estabilidad geopolítica. Es un trato de beneficio mutuo, no una tutela ideológica.
 - 4 En el caso de la OTAN vale decir que Trump no practica un realismo pasivo o de *statu quo*, sino un realismo ofensivo o nacionalista (al estilo de John Mearsheimer). Bajo esta óptica, la incertidumbre que Trump genera en sus aliados no es “locura”, sino una estrategia racional para corregir el “parasitismo” (*free-riding*) de los aliados europeos y obligarlos a asumir los costos de su propia seguridad, maximizando así el poder relativo de EEUU.

Robert Putnam⁵, además de luchar contra el crimen organizado, la migración irregular y la influencia de otras potencias, pero, bajo la mirada de una nueva concepción de lo que son las relaciones con y/o frente a Washington.

Todo lo argumentado han sido los ejes de la agenda que adelanta la “*Era Dorada de Estados Unidos*”, en lugar de cuestiones secundarias o de un discurso humanitario-multilateral, poco efectivo, incluso, donde la democracia, valor central en la retórica liberal⁶, deja de ser el único criterio de cooperación y pasa a ser un atributo negociable frente a la prioridad de la seguridad y la estabilidad.

Este esquema, suerte de andamio, es la base del orden que se construye en hemisferio y, donde América Latina deja de ser leída casi exclusivamente como un espacio que alberga a “democracias vulnerables”, que de vez en cuando imponían el criterio de que debían ser tuteladas, para pasar a formar una zona de competencia de poderes globales.

No solo hay que asegurar la hegemonía estadounidense —en términos de liderazgo—, sino el ensamble de alianzas articuladas sobre la base de intereses estratégicos compartidos más que sobre

5 Cfr. Robert Putnam, *Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games*, 1988. El autor demuestra cómo los líderes estatales deben satisfacer simultáneamente las presiones internas (nivel nacional) y las exigencias internacionales (nivel sistémico). En el caso de Trump, la política exterior se subordina directamente a la consolidación de la soberanía y las demandas económicas de su base interna.

6 Es crucial distinguir conceptualmente el peso de la República frente a la Democracia. Mientras el enfoque liberal prioriza los procesos procedimentales de la democracia de masas, la visión conservadora y realista prioriza la estabilidad de las instituciones republicanas y el Estado de derecho como contenedores del caos.

la afinidad puramente ideológica, para contener fuerzas globales de criterios contrarios.

Bajo esta estrategia, el Estados Unidos de la era Trump, se ha vuelto más selectivo y jerárquico. En el ejercicio de un realismo que permea toda su política, favorece gobiernos dispuestos a cooperar en sus áreas apremiantes, pero despliega la máxima presión y castigo hacia aquellos que optan por la confrontación frontal o promueven la apertura sin límites a actores enemigos.

Así las cosas, el reemplazo del enfoque de “cooperación universal” por una política de condicionalidad estratégica, pasa a depender de la capacidad de los distintos Estados para cumplir con ciertos estándares, que asegure estabilidad regional y hemisférica, que no sean solo parlamentos lanzados al aire cargados de buenas intenciones.

Sin embargo, este retorno de Trump, y del realismo no escapa de las críticas —hay que insistir en destacarlo—, por las formulaciones que promueve la izquierda internacional, porque según ellos, el enfoque de proyección exterior y el mandatario estadounidense reducen la política internacional a una mera lucha de poder suma cero.

Los detractores sostienen que el presidente de Estados Unidos ignora la dimensión de justicia, derechos humanos y lógicas de solidaridad, por habilitar métodos de fuerza, securitización excesiva y la instalación una hegemonía bajo nuevas formas de violencia política⁷.

7 El análisis académico no puede limitarse a repetir el dogma de la izquierda sobre la “securitización”. Autores de la tradición clásica recuerdan que la justicia carente de poder y de un orden soberano que la respalde se vuelve estéril, dejando a los sectores más vulnerables a merced de la anarquía o de la tiranía informal.

En ese orden de ideas, la experiencia del comunismo —por esencia autoritario—, y del socialismo populista en América Latina, muestra que la “justicia social” sin orden institucional suele degenerarse en represión, corrupción, fragilidad económica y dependencia de patrocinadores foráneos a la región, que no siempre tienen el interés de la nación latinoamericana, y mucho menos marchan concomitantes a la esencia de Occidente.

Trump encarna entonces —puede leerse así—, una reevaluación crítica del idealismo liberal que marcó buena parte de la política exterior estadounidense en las últimas décadas. Así mismo, en el diagnóstico de este año que ha transcurrido, las acciones del gobierno republicano, no se basan en negar la importancia de la democracia, los derechos humanos o la cooperación, sino de darles el lugar que les corresponde.

La existencia del orden y la capacidad de los Estados para resistir amenazas son condiciones previas en un esquema necesario para cualquier proyecto que busque una efectiva justicia social, quizás un teórico sesudo de las ciencias políticas podría afirmar que primero va la idea de garantizar la república y luego la de la democracia, y así para Trump funcione el orden Internacional.

En consecuencia, las lógicas de Trump, operan por un efectivo regreso del realismo político en la política exterior de Estados Unidos y de una necesaria reconfiguración de las relaciones entre Washington y América Latina, donde estabilidad y la responsabilidad política, enfrenten o aminoren el desorden multipolar que el siglo XXI ha traído, entendiendo esto como requisito previo de una democracia fuerte como la que buena parte de los latinoamericanos desean y aspiran consolidar.

II. El “Escudo Trump”: arquitectura de seguridad hemisférica

En los argumentos esgrimidos por la administración Trump, un nuevo diseño tanto del criterio como de la praxis de la seguridad, se ha puesto en primer lugar dentro de la agenda regional, denominado el “Escudo de las Américas”⁸ y tras cámaras, “El Escudo Trump”, no es una simple metáfora mediática, sino un recurso polifacético que articula distintas dimensiones de la política exterior estadounidense y de la seguridad en el hemisferio occidental.

En su diseño, confluyen políticas de respaldo a los controles migratorios y combate al narcotráfico, acuerdos de inteligencia, cooperación militar, y presión diplomática y económica, lo que para las voces de izquierda es un camino a la perforación de la independencia, soberanía⁹ y “autodeterminación de los pueblos”¹⁰, sobre gobiernos percibidos como inestables o alineados con los enemigos de Occidente.

8 Iniciativa propuesta por la administración Trump que respaldaron Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay, Guayana y Trinidad y Tobago, en la cumbre celebrada en el Doral, estado de Florida el 07 de marzo de 2026.

9 Vale decir que, desde el realismo, la soberanía no es un concepto abstracto o un escudo para la impunidad institucional, sino una capacidad real de control territorial, es decir, si un Estado no puede controlar sus fronteras ni su crimen organizado, ya ha perdido su soberanía de facto ante los carteles; por ende, el “Escudo” no perfora la soberanía, sino que ayuda a los Estados a recuperarla frente a poderes criminales.

10 Vale la pena señalar que, desde un enfoque estrictamente legal, la cuestión de la autodeterminación solo aplica a únicamente a los pueblos coloniales que buscan emanciparse y ser soberanos, no confundir con libre determinación y secesión, son tres acepciones totalmente diferentes.

Más que un simple conjunto de medidas discretas, el “Escudo Trump”¹¹ es la expresión de una reorganización en la política exterior de Estados Unidos hacia un enfoque de seguridad integral, que pone al centro la estabilidad, la soberanía y la capacidad de los Estados aliados de la región, para resistir amenazas internas y externas, dispuestos a seguir una agenda de seguridad compartida de criterios y valores.

En tal sentido, la operacionalización de esta arquitectura de seguridad se materializa a través de programas de apoyo condicionado, sanciones selectivas y el uso de la cooperación económica y militar como herramienta de incentivo o castigo. En este diseño, la estabilidad interna de los Estados latinoamericanos se convierte en un requisito previo para la interlocución en términos de cooperación¹² con Washington. Así, el combate al narcotráfico se erige como un eje estratégico fundamental, viabilizado mediante operaciones conjuntas, el despliegue de fuerzas policiales y militares, y el intercambio de flujos de información entre agencias de inteligencia.

Esta dinámica de seguridad colectiva y condicionalidad reconfigura la geografía de las alianzas en el hemisferio. Frente a las lecturas críticas que denuncian estas acciones como mecanismos tradicionales de penetración imperialista; la evidencia sugiere que la exigencia central de la administración Trump se orienta a la obtención de compromisos estratégicos para contener la influencia de actores como China, Rusia, Irán u otros factores radicales, utilizando la presión diplomática y económica como variables de complementariedad.

11 En inglés es conocido como *Americas Counter Cartel Coalition*.

12 En los casos de Venezuela y Cuba el asunto puede ser distinto, porque son abordados en su justa dimensión, que suponen planes de mayor rigor como lo planteado desde el 03 de enero de 2026, fases de estabilización, recuperación y transición democrática.

La presión sobre regímenes autoritarios, corruptos o abiertamente alineados con actores perturbadores, que ven restringido el acceso a recursos, créditos y apoyos diplomáticos, a la vez que enfrentan un entorno de mayor vigilancia, son los resultados del “Escudo Trump” que hay que insistir —no solo se dirige a los Estados—, sino que también reordena la forma en que los gobiernos latinoamericanos entienden su propia seguridad y sus relaciones frente a Washington.

En reacción, la izquierda crítica no ha dejado de formular objeciones a esa lógica de seguridad y sostiene que esto es una política de exclusión, criminalización y securitización irracional, que se orienta especialmente contra la movilidad de las clases populares y además, construye narrativas morales sobre la alteridad migrante¹³.

Desde una lectura realista, es necesario reconocer que el ejercicio excesivo de la violencia política es, efectivamente, un riesgo: la normalización de la emergencia, la expansión de la vigilancia y la erosión de garantías pueden quedar legitimadas bajo el discurso de la protección. Sin embargo, no puede eludirse el hecho de que la región presenta una ausencia de controles efectivos que genera vulnerabilidades evidentes.

13 La crítica académica desde los enfoques poscoloniales y de izquierda argumenta que esta arquitectura de seguridad estigmatiza los flujos migratorios, criminalizando dinámicas de movilidad que responden a asimetrías estructurales y a la violencia local. Desde esta perspectiva, se acusa a la retórica de la “seguridad compartida” de encubrir la preservación de la zona de influencia exclusiva de los Estados Unidos. No obstante, el enfoque realista responde que omitir el control soberano de las fronteras no soluciona la desigualdad, sino que entrega el territorio al control informal de actores criminales no estatales.

El crimen organizado, redes de tráfico de personas, lavado de activos y operaciones de influencia de actores disruptivos que prosperan en contextos de fronteras porosas y de debilidad institucional, impone entonces a Washington la tarea de demostrar cómo mecanismos de control geográfico, transparencia y responsabilidad política son la base del proyecto Trump, que no abandona como muchos alegan, el eje de reforzar lo democrático o la condición democrática en la región.

En ese sentido, no es la simple acumulación de poder, lo que sostiene Donald Trump —pese a que la centralización de su liderazgo permita proyectarlo cómo el César de ese imperio que se autopercibe heredero de Roma—¹⁴, sino que su estrategia está profundamente ligada a la construcción de un orden estructural.

Finalmente, bajo esta lógica, la seguridad y la legalidad se instituyen como condiciones sistémicas necesarias para que las sociedades latinoamericanas puedan desarrollarse, mitigando la exposición constante a la inestabilidad institucional y a la dominación de factores ideológicos perturbadores.

El Realismo de Trump en tres vértices:

Eje Analítico	Argumento Central	Ejemplo
Condicionalidad estratégica	EEUU ya no financia el multilateralismo vacío. La cooperación con América Latina se basa en resultados mutuos. Seguridad – Fronteras.	Se da el reemplazo de la ayuda ciega por acuerdos de inversión condicionada.

14 Se hace la salvedad que mencionar a Trump en este caso como el César va más en términos de reconocerle como hombre fuerte que en el estricto sentido histórico dado que el cesarismo precisamente fue el gran culpable de la destrucción de la República Romana.

Eje Analítico	Argumento Central	Ejemplo
Institucionalidad republicana	La izquierda ofrece "justicia social" que deviene en tiranía informal. Trump prioriza la estabilidad institucional como paso previo a la libertad y la democracia.	El colapso económico de los regímenes populistas en la región (Venezuela/Cuba) debido a la erosión del Estado de derecho.
Contención multipolar efectiva	La multipolaridad no es un paraíso democrático; es la entrada de potencias autocráticas (China/Rusia) en el hemisferio, sin contar con la irrupción de grupos paraestatales (Hamás, Hezbolá) entre otros.	El "Escudo de las Américas" frente al endeudamiento estratégico de América Latina con la Franja y la Ruta china.

Fuente: Elaboración Propia.

III. La maniobra y la estrategia: El corolario Trump

Las líneas hasta ahora esgrimidas dan a entender una realidad mucho más profunda en *el tiempo que transcurre para la "Era Dorada de Estados Unidos"*, y aunque haya quienes sostengan que el excepcionalismo estadounidense, el Destino Manifiesto y la lógica —tradicional— protestante, parezcan haber desaparecido, en la lucha interna entre demócratas y republicanos —como así los detractores de Trump han sentenciado—, un corolario¹⁵ se ha

15 Algunos acusan que es un "rebranding" de la Doctrina Monroe, que ha sido actualizado para justificar la influencia regional, que si bien el primero funcionaba como una advertencia a Europa, el actual sostiene

levantado nuevamente para sostener el papel guía que con primacía demuestra dicho país.

El que se priorice en América Latina un ejercicio multilateral denominado “Escudo de las Américas” no puede leerse como un simple mecanismo de seguridad circunstancial, sino como una expresión institucional de un orden regional realista que responde a las demandas de estabilidad, soberanía y seguridad compartida en un hemisferio marcado por el desorden multipolar.

En su diseño, merece decirse que esa articulación no equivale a una relación de marioneta, sino a una reacción regional selectiva que Washington impulsa, entendiendo a toda esta zona como el “*Espacio Vital*”, sin que se entienda en términos geopolíticos asociados a la expansión de Alemania Nazi.

Además de que con la venia de contar en este momento con gobiernos de centro-derecha o de tendencia conservadora, los países latinoamericanos encuentran en el Escudo de las Américas un espacio para coordinar intereses de seguridad, compartir capacidades y elevar el costo político y diplomático para los gobiernos autoritarios¹⁶ o alineados con intereses antagónicos.

que controlará su destino —el de EEUU— en el hemisferio, sin detallar que —a criterio personal— se podría considerar como el Escudo Trump, que ha quedado demostrado en la presión sobre Venezuela, y se muestra reforzado sobre Cuba y El Caribe, además de ser una seria demostración de que Washington vuelve a mirar a América Latina con una lógica de Dominación, Hegemonía y Primacía como sostendría Hedley Bull en *The Anarchical Society*.

16 La crítica desde los sectores de izquierda argumenta que esta visión se edifica en detrimento de los supuestos beneficios de un mundo multipolar o pluripolar. Sin embargo, dicha postura suele omitir que, en la praxis de las Relaciones Internacionales, la multipolaridad sin un equilibrio de poder claro deviene en caos, anarquía y zonas de fricción. Asimismo, ignora de forma deliberada que actores como la Federación de Rusia

Los detractores podrán sostener suspicacias e incluso establecer que se trata de un “show” político, al que habría que tener cuidado con las ligerezas con que se trata. Si bien es cierto, la Doctrina Monroe no ofreció certezas en sus acciones, sí en advertir que cada vez que un presidente la invocó, el hemisferio terminó enfrentando consecuencias que no había previsto. En efecto, pensar en el escenario actual bajo esta premisa es quizás el camino más razonable para abordar la maniobra y la estrategia de Trump.

En este escenario, el peso de las operaciones comerciales, —especialmente el alivio energético a Venezuela y la contención de potencias competidoras—, revaloriza estratégicamente la importancia de América Latina. Esta relevancia otorga a las representaciones políticas de la región un mecanismo para frenar el avance de proyectos autoritarios que, al alejarse de la legalidad democrática propician el quiebre institucional de las repúblicas¹⁷.

Este impacto no es una capitulación soberana en favor de Estados Unidos o de Trump sino más bien sobre el comunismo y el socialismo autoritario en la región, abriendo caminos para truncar a gobiernos de corte autoritario que mantienen relaciones abiertas con los enemigos del Occidente cristiano, que se sostienen, en buena medida, en la ayuda financiera, diplomática y logística de aliados foráneos a la región.

persiguen sus propios intereses de expansión bajo el proyecto de una Pax Russica, mientras que la República Popular China ejerce una penetración multidimensional mediante el poder blando (soft power) y el apalancamiento financiero de la Iniciativa de la Franja y la Ruta.

- 17 Se insiste en la necesidad de rescatar la preeminencia conceptual de la República como el fin supremo del ordenamiento político interno. Frente a la vulnerabilidad de los procedimentalismos democráticos de masas, que suelen ser permeables al avance del populismo autoritario, la solidez de las instituciones republicanas y el imperio de la ley constituyen la verdadera zapata sobre la cual puede erigirse una sociedad estable.

Bajo la lupa de la izquierda, esto es la reinstalación de la hegemonía estadounidense, con una especie de OTAN regional¹⁸ al servicio de la derecha, considerando que coarta la libertad y “redefine” la seguridad como cuestión secundaria, homologando la lógica de la violencia política y que, en el fondo, impone una visión reaccionaria del orden regional que hasta ahora había existido¹⁹.

Ante esta lectura, el análisis no puede limitarse a repetir la retórica opuesta, sino a responder con argumentos teóricos y de orden institucional en lo práctico; cuestión que obligará al liderazgo político regional a decidir si coordina sus estrategias con Trump o asume los costos del desorden multipolar.

Conclusión

Planteadas estas líneas, merece destacarse que la trascendencia del corolario Trump es el giro definitivo de Washington para mirar a América Latina con una preeminencia absoluta, e incluso en una forma tan polifacética que rompe con cualquier argumento que sostenga que solo es petróleo y comercio lo que importa por encima de la democracia.

18 OTAN regional, es un término usado comúnmente siendo un anacronismo conceptual, ya que el Escudo de las Américas no busca crear una burocracia multilateral costosa, sino un entramado de alianzas bilaterales rígidas basadas en la corresponsabilidad y resultados en seguridad.

19 Un dato curioso es que las voces escépticas sostienen que el Corolario ha reinterpretado al siglo XIX con romanticismo, presentando a EEUU como una potencia ya emergente en 1823, cuando sus más acérrimos opositores sostienen que era una república “débil”, pero que tenía muy claro y es lo que importa, el valor real del dominio marítimo, vías y accesos de navegación comercial -como hoy día es el Canal de Panamá- control terrestre y aéreo que en resumidas cuentas, es una mezcla de nostalgia estratégica y de inteligencia geopolítica.

Tampoco esta estrategia se trata de un repliegue decimonónico, es en esencia una reformulación al calor realista, en primera instancia de diseño, en segunda, de la arquitectura hemisférica de cierre definitivo a ideologías y actores disruptivos para el Occidente cristiano.

También merece decirse que, en el dilema latinoamericano, tan repetido aquello del intervencionismo, el colapso de las repúblicas y del sistema democrático no es una responsabilidad absolutamente estadounidense, sino de la debilidad institucional que el populismo y el crimen organizado aprovechan como escudo; por lo que Trump insiste en consolidar instituciones fuertes y luego velar por la democracia.

Quizás, habría que generar campañas en defensa de la República si en algún momento se quiere ver una sólida democracia, a ello Trump sin decirlo está invitando.

Finalmente, en un ambiente marcado por las debilidades estructurales que se han sostenido hasta ahora, la civilización de la que es propia la región corre peligro, la multipolaridad es un camino que muestra profundos desequilibrios, abre pasos a la exacerbación de la anarquía y deja claro que el éxito de esta estrategia es un compromiso mancomunado.

Así las cosas, la *Era Dorada de Estados Unidos* ha traído este último dique de contención, que hasta ahora los remanentes del hemisferio occidental han elucubrado para defenderse, siendo una pena y una desgracia que Joe Biden, “pensando en democracia” perdiera el tiempo y no entendiera que hay mucho más en juego: Civilización, República, Instituciones y Libertad.

Kevin Canales García

La fragilidad de la democracia: transición y cultura republicana en Chile

En medio de su visita a Chile en marzo de 1992, el sociólogo y escritor francés, Alan Touraine, declaró que “esta no es una transición perfecta, pero es la mejor que yo haya conocido”¹. Sus palabras ilustran bien el modo en que el mundo observó el proceso de transición a la democracia en Chile. Debajo de ese asombro mundial, se tejieron tensiones de gran magnitud entre los actores políticos involucrados, tanto civiles como militares. Había demasiado en juego, y una mala decisión, por más insignificante que pareciera, podía desencadenar el fracaso de la transición y posterior consolidación democrática. En los 17 años de dictadura militar, cuya huella permanece hasta hoy, se cometieron —como en la mayoría de los regímenes autoritarios del mundo— graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, se quitaron de raíz la libertad de prensa y expresión, se intervino el Poder Judicial y se clausuró el Congreso Nacional. Hasta hoy, cientos de familias, con una profusa ayuda del Estado, buscan los cuerpos de sus detenidos desaparecidos. Este es probablemente uno de los problemas morales más importantes del Chile de la transición². Conscientes de esa

1 Ignacio Walker, “Transición y consolidación democrática en Chile”, *Revista de Ciencia Política* 14, núms. 1-2, 1992, 89.

2 Gonzalo Vial Correa, “Un problema moral”, en: Gonzalo Vial, *Política y crisis social*, Ed. Emilia García Cox, 2.ª ed. ampliada, Ediciones IdeaPaís, Santiago, 2023, 137-139.

fractura, amplios sectores políticos y sociales comprendieron que la derrota al régimen no se limitaba a la contienda electoral, sino también implicaba reconstruir gradualmente las condiciones de convivencia pacífica, incluso si ello suponía aceptar las condiciones impuestas por los militares.

El temor al retroceso autoritario influyó profundamente en las élites políticas de la época, tanto en el modo en el que diseñaron la transición como en la forma en que la sociedad chilena se relacionó con las nuevas instituciones democráticas. La preocupación por las formas republicanas, la moderación discursiva, el respeto a los procedimientos institucionales, la lógica de los acuerdos amplios y sobre todo, los estables y ordenados mecanismos de traspaso de mando, son expresiones simbólicas de esa estabilidad democrática y continuidad institucional que estuvo en el seno de las preocupaciones de la transición. Y si bien no es posible designar como causa única y principal de la configuración republicana chilena a ese hito político —puesto que Chile contaba desde antes del colapso de 1973 con una cultura estatal democrática relativamente consolidada en comparación con otros países de América Latina— sí se le puede considerar como un episodio histórico que relevó la importancia de los mecanismos institucionales de alternancia en el poder. Basado en lo anterior, el presente artículo examina cómo las tensiones y complejidades de la transición chilena influyeron en la consolidación de una cultura política particularmente consciente del valor—y de la fragilidad— de la democracia representativa y de los procesos pacíficos de transferencia del poder político.

La tradición republicana de Chile y su colapso en 1973

Después del caos político de los primeros años de la independencia, Chile logró construir un poder central relativamente estable. Tempranamente en 1830, a diferencia de las experien-

cias en otros países latinoamericanos, surge un “gobierno fuerte, extraño al militarismo y al caudillismo”, que luego proclama en la Constitución de 1833 que “Chile es una República democrática representativa” y que le otorga legitimidad a quien ha sido elegido según mecanismos legales e institucionales³. La introducción de esta forma de organizar la esfera pública, aun cuando no excluye todos los vicios autoritarios, sí ponía de relieve la importancia de un poder democrático y legítimo. Ese elemento estuvo desde los inicios de la configuración republicana del Estado de Chile. Así las cosas, en la Constitución y en la cultura se advierte una pretensión por legitimar el poder no por la vía militar, el carisma o el linaje —cuestiones que eran recurrentes en los países vecinos—, sino a través de procedimientos, normas y elecciones. Entre 1833 y 1925 Chile desarrolló una cultura política fuertemente legalista, que convivía con el “ethos republicano” tan característico de la aristocracia de la época⁴. No obstante en la imperfección de ese diseño, la estabilidad coexistió con mecanismos oligárquicos de control político y episodios recurrentes de violencia civil.

Sin embargo, desde 1925 hasta 1973 Chile vivió probablemente su período más plenamente democrático. Al alero de la Constitución del 25’ —que surgió después de una fuerte crisis del régimen político— se buscó fortalecer el presidencialismo, separar formalmente a la Iglesia y el Estado, modernizar el aparato estatal y dar mayor estabilidad institucional. Además, desde la perspectiva sociológica, este entramado institucional se legitimó a través de la inclusión de una proporción importante de la población a la experiencia de la modernización⁵, que antes de su instauración

3 Mario Góngora, *Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX*, Ediciones La Ciudad, Santiago, 1981, 13.

4 *Ibíd.*

5 Para más detalles, ver Aldo Mascareño, “La Constitución de 1925: crisis y legitimación constitucional en perspectiva sociológica”, en 1925. *Conti-*

estuvo fuertemente limitada por el control casi absoluto de la aristocracia criolla sobre la vida política y económica de Chile⁶.

En este periodo de casi 50 años se destacó la alternativa pacífica en el poder, un fuerte sistema de partidos políticos, respeto a los resultados electorales, libertad de prensa y una presencia civil predominante. En contraste con la realidad de los demás países de la región, donde abundaban los golpes militares, las dictaduras y los caudillismos, Chile logró tener por décadas un sistema político competitivo e institucionalizado. No obstante, nada de ello fue suficiente para evitar el quiebre de la democracia en 1973. El análisis de las causas que provocaron el colapso institucional chileno es probablemente una de las materias más discutidas e investigadas de la última mitad de siglo, no solo en el espacio académico, sino también en el plano social y político donde aún no existe consenso sobre su explicación, ni tampoco sobre su legitimidad.

Con todo, el golpe militar de 1973 que derrocó al socialista Salvador Allende se produjo luego de un aumento progresivo de la temperatura social del país. Desde 1970 la tensión y la polarización solo creció: amplios sectores del país percibían que estaba en disputa el modelo completo de sociedad, economía y convivencia política. El proyecto revolucionario de Allende incluía una transformación total de las cadenas productivas, de la intervención del Estado en el mercado y una redistribución económica de gran magnitud. La lógica maniquea se tomó la discusión pública, mientras se asomó una profunda crisis económica que se manifestó en

nidad republicana y legitimidad constitucional: una propuesta, de Arturo Fontaine et al., Catalonia, Santiago, 2018.

6 Para más detalles, ver Alberto Edwards Vives, *La fronda aristocrática en Chile*, Editorial Universitaria, Santiago, 2022.

una alta inflación, desabastecimiento, mercado negro y paralización de sectores productivos⁷.

Aunque existe documentación que avala la tesis de un apoyo popular mayoritario al golpe de Estado, este se esfumó en la medida que la dictadura tomó la decisión de prolongar su estadía en el poder, negándose a llamar a elecciones libres que restauraran el orden democrático. Más bien, a poco andar, se toma la decisión de realizar una transformación política y económica, cuyo arquitectura se le atribuye principalmente a Jaime Guzmán⁸. El objetivo trazado por el régimen fue por un lado, “ampliar en el mayor grado posible las libertades económicas”⁹, y por otro, limitar las libertades políticas toda vez que podrían constituir un potencial peligro en función de la amenaza marxista¹⁰. Esos objetivos se concretaron en miles de decretos y leyes publicadas, y en la Constitución Política de la República de 1980.

La transición como política de contención

¿Cómo el régimen militar sufrió tal nivel de debilitamiento que lo llevó a entregar el poder a un Presidente opositor? Para esa pregunta, conviene mirar la crisis económica de 1983. En ese año, se desplomó el sistema financiero, provocando como nunca una masiva protesta ciudadana que obligó al régimen a realizar profundos cambios que ampliaron la arena política: se autorizó el funcionamiento de partidos políticos y se levantó la censura a

7 Alfredo Sepúlveda, *La Unidad Popular: los mil días de Salvador Allende y la vía chilena al socialismo*, 2.ª ed., Sudamericana, Santiago, 2020.

8 Renato Cristi, *El pensamiento político de Jaime Guzmán*, LOM, Santiago, 2020, 34.

9 Daniel Mansuy, *Nos fuimos quedando en silencio: la agonía del Chile de la transición*, Instituto de Estudios de la Sociedad, Santiago, 2016, 32.

10 *Ibíd.*

la prensa¹¹. La ampliación de la participación política debilitó los planes del régimen de perpetuarse en el poder. Si bien la Constitución del 80' consideraba un plebiscito para el año 1988, donde la Junta Militar propondría un único candidato a la ciudadanía, este siempre fue considerado como una manera de legitimarse en el poder, consolidar la senda de transformaciones globales y descomprimir la presión internacional sobre la dictadura¹².

En el cumplimiento del itinerario constitucional que los mismos militares trazaron, se desarrolló el plebiscito que incluía como único candidato al general Pinochet. A poco andar, la campaña del "No" se transformó en ocasión de reunión de millones de chilenos, más del 90% de las personas en edad de votar se inscribieron en los padrones electorales, empujados fundamentalmente por los partidos opositores en lo que fue una real escuela cívica para toda una generación que jamás había participado de un proceso electoral¹³. La algarabía se desató cuando el 5 de octubre de 1988 el rechazo se impuso con un 55% de la votación, muy lejos de las expectativas del régimen. La pregunta era si Pinochet y sus aliados reconocerían la derrota, harían un llamado a elecciones presidenciales y parlamentarios, junto con una entrega pacífica

11 Véase Carlos Huneeus, *La democracia semisoberana: Chile después de Pinochet*, Taurus, Santiago, 2014, 67-72.

12 Inicialmente, el régimen consideró que para el plebiscito ratificatorio no era necesario contar con registros electorales, una condición elemental para que los resultados fueran fidedignos. Esto continuaba la lógica del año 1980 en el plebiscito constitucional. Sin embargo, un fallo del Tribunal Constitucional obligó al régimen a aceptar ciertas condiciones, como la construcción de los registros electorales y la entrada en vigencia del Tribunal Calificador de Elecciones. Véase Rafael Otano, *Crónica de la transición*, Planeta, Santiago, 1995, 44.

13 David Vásquez Vargas, "Patricio Aylwin Azócar 1970-1990," en *Patricio Aylwin Azócar: una vida republicana: convicción, política y doctrina*, ed. David Vásquez Vargas y María Teresa Corvera Vergara, Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, Santiago, 2015, 150.

del poder en 1990. Aunque existen reportes que dan cuenta de una discusión interna, finalmente la balanza se inclina por cumplir lo prometido y aceptar el triunfo del No, sin antes delimitar muy bien lo que vendría en el periodo de la transición y el margen de acción del nuevo gobierno democrático.

Los 17 meses formales que duró la transición estuvieron marcados por dos elementos claves. Primero, el régimen tomó la decisión de ejercer sus funciones hasta el último día, publicando una sarta de normas legales y administrativas con el fin de constreñir al máximo la acción de la próxima administración¹⁴. Hubo al menos 69 leyes de amarre sobre el sistema político, el régimen económico y el estatuto de las Fuerzas Armadas¹⁵. A esto, habría que sumar las disposiciones de la Constitución de 1980 que, aun cuando logró ser reformada en 1989 con acuerdo de la oposición, incluía un sistema electoral binominal¹⁶, perpetuaba a Pinochet como Comandante Jefe del Ejército, establecía senadores designados y perpetuos, instauraba quórum supra mayoritarios para modificar leyes y otorgaba importantes atribuciones al Consejo de Defensa Nacional (COSENA) para ejercer una verdadera tutela militar sobre la democracia. Todo lo anterior da cuenta que, si bien en el papel aceptó su derrota eleccionaria, en la práctica intentó, por medios diversos, que el gobierno entrante no pudiera ejecutar acciones muy distintas a lo que ellos mismos hubiesen querido.

14 Siempre fue sabido que la probabilidad de la derecha (que en su mayoría respaldó al régimen en el plebiscito constitucional, salvo contadas excepciones como Sebastián Piñera) de ganar la elección presidencial de 1989 era prácticamente cero. Se avizoraba un gobierno de los opositores a la dictadura y eso impregnó gran parte de las decisiones de la Junta.

15 Carlos Huneeus, *El régimen de Pinochet*, Taurus, Santiago, 2016, 611.

16 En la práctica, este sistema electoral generaba un empate de dos fuerzas políticas aunque una tuviera clara predominancia sobre otra. La modificación de este sistema fue una de las grandes banderas de la centroizquierda, hasta que lograron instaurar un sistema proporcional en el año 2017.

¿Cuál fue la estrategia opositora en su relación con el régimen? ¿Se adecuó sin presión interna a las reglas establecidas por Pinochet? ¿Actuó con pragmatismo o se aferró a sus consignas ideológicas? ¿Construyeron una coalición programática o se alinearon únicamente por la recuperación de la democracia? Todas estas preguntas remiten a la segunda dimensión característica de la transición. Aquí nos detendremos más en detalle, pues su análisis constituye la base fundamental para comprender el Chile actual y sus procesos de traspaso de mando.

Para comenzar, incluso antes del plebiscito, la oposición no tenía resuelta la vía por la cual quería derrocar al régimen. La alternativa electoral no fue necesariamente de consenso. Existían grupos que ejecutaron actos de extrema violencia, y que consideraban que la única forma efectiva de salir de la tiranía era a través de la lucha armada. Dentro de esos grupos, se encontraban el Partido Comunista y el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Desde la posición contraria, Patricio Aylwin —quien luego se convertiría en el Presidente de Chile del primer periodo democrático post dictadura— estaba convencido que la única forma de evitar el enfrentamiento entre chilenos y lograr la salida de Pinochet era a través de la vía institucional: aceptar la Constitución de 1980 y admitir como indispensable el acuerdo de los uniformados en las materias de la transición¹⁷. Aylwin sabía que los militares tenían poder de veto y estaba dispuesto a transar cuestiones fundamentales, porque era consciente de la existencia de bienes superiores en juego. Nada debía interponerse en el deseo nacional de tener una salida pacífica y ordenada. Su tesis no generó siempre consenso al interior de la oposición; sin embargo, con el paso del tiempo se volvió la única alternativa viable, aunque eso supusiera morigerar las expectativas maximalistas de parte importante de

17 Mansuy, *Nos fuimos quedando en silencio*, 60.

quienes veían con alegría la caída del autoritarismo y el regreso de la democracia.

El pragmatismo de Aylwin no sustituye algunos triunfos en la negociación, sobre todo en torno a aminorar el efecto de algunos enclaves autoritarios de la Constitución¹⁸. Con todo, como toda dictadura que termina, el solo paso a un gobierno democrático no la consagra como una democracia plena. En el caso chileno, la inauguración del gobierno de Patricio Aylwin que lideraba la Concertación de Partidos por la Democracia supuso coexistir con un importante volumen de enclaves autoritarios que limitaban, restringían o directamente prohibían las acciones que cualquier gobierno democrático debería poder impulsar, sin tutelaje de las Fuerzas Armadas ni otros organismos legítimos para ello.

Luego de constatar que un régimen militar se termina no con el derrocamiento popular, sino con la lucha dentro de la institucionalidad disponible, la pregunta por lo que sigue es consustancial. Las fuerzas opositoras entendieron rápidamente que la fórmula de unión no era a través de cuestiones ideológicas —que podría resultar excluyente e infructífera—, sino más bien bajo la convicción de que la coyuntura era de tal nivel que requería construir una mayoría sociopolítica entre el centro y la izquierda, en torno a dos tareas fundamentales: lograr las condiciones más democráticas posibles para el futuro gobierno y transformar la coalición victoriosa del plebiscito en una coalición de gobierno¹⁹. Ello implicaba un único

18 En la reforma constitucional del 89' la oposición logró flexibilizar el sistema de reforma de la Constitución, reducción del periodo presidencial a cuatro años, disminución de la importancia de los senadores designados, cambios en las atribuciones del COSENA, mayor protección de los derechos humanos, entre otros. Ver "Manuel Garretón, La redemocratización política en Chile: transición, inauguración y evolución".

19 Véase Manuel Antonio Garretón M., "La redemocratización política en Chile: transición, inauguración y evolución," *Estudios Públicos*, núm. 42,

candidato presidencial, acompañado de un pacto parlamentario y “un programa que asegurara completar la transición en términos institucionales”²⁰. Fue así como la Concertación de Partidos por la Democracia logró aglutinar a 17 partidos y asociaciones políticas opositoras a la dictadura.

Qué hacer con la enorme herida social en materia de violaciones a los derechos humanos fue también un asunto de grandes discusiones. No solo se trataba de temas procedimentales para el esclarecimiento de la verdad. Su complejidad radicaba, sobre todo, en su componente moral: era insostenible pensar que la impunidad de los victimarios se consolidara en medio de un gobierno cuya principal lucha había sido la causa de los derechos humanos. Por supuesto, Pinochet tenía un especial interés en que ni él ni sus colaboradores fueran juzgados por causas de delitos de lesa humanidad. De hecho, poco antes de dejar el poder, sostuvo que si le tocaban a uno de sus hombres, se acababa el Estado de derecho²¹. Aquello ilustra bien la fragilidad de la transición y por qué, aunque existiese un profundo anhelo de hacer justicia por las miles de víctimas de tortura y asesinato, debía combinarse con una dosis de realidad. Simplemente no era imaginable un juicio a Pinochet ni a sus principales colaboradores en los primeros años de los 90’.

Si bien al inicio, Patricio Aylwin recibió duras críticas de organizaciones de derechos humanos, sobre todo cuando sostuvo que buscarían “toda la verdad y justicia en la medida de lo posible”²²,

1991.

20 *Ibíd.*

21 Jorge Correa Sutil, “Justicia transicional”, en *A 50 años del 11 de septiembre de 1973: diecisiete académicos opinan*, Ediciones Universitarias de Valparaíso, Valparaíso, 2023, 81.

22 *Ibíd.*

el resultado final fue un reconocimiento de expertos internacionales a Chile como uno de los países que ha alcanzado mayor grado de justicia. Jorge Correa Sutil, secretario de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (1990-1991) reconoce que “ha sido necesario que pasemos por lentas y largas etapas, por hitos largamente ansiados, pero que tomaron muchos más años en llegar de los que muchos habríamos esperado”²³.

El costo de la estabilidad

La transición chilena logró consolidar uno de los procesos de recuperación democrática más estables y exitosos²⁴ de América Latina. Con todo, esa estabilidad no estuvo exenta de costos políticos y culturales. El temor persistente a un nuevo quiebre institucional —heredado del trauma de 1973 como de la experiencia autoritaria posterior— generó una cultura política orientada a la moderación, la lógica de los acuerdos amplios y la contención del conflicto. Como tradicionalmente se le designa en estudios políticos, la “democracia de los acuerdos” permitió importantes niveles de gobernabilidad, estabilidad y crecimiento institucional.

Esa misma lógica produjo también un progresivo proceso de despolitización de la ciudadanía²⁵, que redujo el espacio para la deliberación política, privilegiando el acuerdo técnico y las cuestiones administrativas de la gestión del Estado. El costo de evitar una repolarización fue el silencio doctrinal e ideológico de los secto-

23 *Ibíd.*

24 La calificación de exitoso está lejos de querer hacerlo parecer perfecto. Como hemos visto, el proceso de transición estuvo repleto de nudos y conflictos, también de imperfecciones. Sin embargo, el proceso terminó por conducir a Chile a una democracia plena y a un importante desarrollo social, político y económico.

25 Tomás Moulian, *Chile actual: anatomía de un mito*, 3.ª ed., LOM, Santiago, 2002.

res políticos²⁶ y la desmovilización progresiva de la sociedad civil. Aun así, sería injusto desconocer los efectos positivos que dicha cultura política tuvo sobre la continuidad institucional chilena. La lógica de los acuerdos postransición, contribuyó a consolidar una valoración transversal de los procedimientos democráticos y de los mecanismos pacíficos de alternancia en el poder. Los cambios de mando presidenciales, incluso entre sectores opuestos, fueron adquiriendo un fuerte valor simbólico como expresiones visibles de estabilidad republicana y legitimidad democrática. La alternancia entre gobiernos de centroizquierda y centroderecha se desarrolló durante décadas dentro de marcos ampliamente aceptados por todos los actores relevantes del sistema político, cuestión poco frecuente en la historia latinoamericana reciente.

Por supuesto, esta continuidad no puede explicarse únicamente por el legado político de la transición. Chile mantiene todavía un sistema de partidos relativamente institucionalizado pese a la creciente fragmentación política de los últimos años. Del mismo modo, instituciones como el Servicio Electoral de Chile han logrado construir amplios niveles de confianza pública gracias a la prolijidad técnica y transparencia de sus procesos electorales, otorgando certeza a los distintos sectores políticos y haciendo prácticamente inviable cualquier intento serio de desconocer la legitimidad de los resultados electorales.

La experiencia chilena demuestra, finalmente, que las democracias no se sostienen únicamente sobre normas constitucionales o equilibrios institucionales. También dependen de memorias

26 La izquierda, por un lado, aceptó el sistema económico del régimen y dedicó sus esfuerzos a perfeccionarlo en los 20 años que estuvo en el poder. Mientras tanto, la derecha, cómoda por el sistema binomial, no tuvo la necesidad de argumentar políticamente su matriz de pensamiento. Para ahondar en ello, véase Mansuy, *Nos fuimos quedando en silencio*.

históricas compartidas, de aprendizajes políticos colectivos y de la capacidad de las sociedades para reconocer el costo de perder la convivencia democrática. Durante décadas, el recuerdo del colapso institucional de 1973 operó en Chile como una advertencia silenciosa frente a los riesgos de la polarización extrema. Quizás allí radique una de las claves más profundas de la persistente valoración chilena por las formas republicanas y por los procesos pacíficos de transferencia del poder político.

Sebastian Horesok

Democracias bajo asedio. El narco como el gran elector de América Latina

En América Latina no existen espacios vacíos en el poder. Lo que el Estado abandona por incapacidad o por olvido, la barbarie lo ocupa por la fuerza.

Arturo Uslar Pietri¹

El “derecho a veto” del narcotráfico: El caso de Miguel Uribe Turbay.

En una pequeña plaza al occidente de Bogotá, a las 17:29 horas, un adolescente de 15 años detonó un arma de fuego contra el entonces precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay. El ataque ocurrió en un mitin de campaña donde Miguel exponía la necesidad de una política real y contundente en materia de seguridad, enfocada especialmente en el combate al narcotráfico². Para él, esta problemática no era un factor ajeno: su

1 Arturo Uslar Pietri, *Fachas, fechas y fichas*, Editorial Ateneo de Caracas, 1982, 145.

2 Juan Esteban Lewin, “El asesinato de Miguel Uribe devuelve a Colombia al horror de la violencia a nueve meses de las elecciones”, *El País*, América-Colombia, 11 de agosto de 2025, <https://elpais.com/america-colombia/2025-08-11/el-asesinato-de-miguel-uribe-devuelve-a-colombia-al-horror-de-la-violencia-a-nueve-meses-de-las-elecciones.html>.

madre, hija del expresidente Julio César Turbay³, fue secuestrada y posteriormente asesinada por el narcoterrorismo de Pablo Escobar a principios de los años 90, en medio de la ofensiva criminal para derrocar el tratado de extradición⁴.

Miguel creció entre coches bomba, sicarios y funerales multitudinarios de víctimas de la narcoviolenencia, como Luis Carlos Galán Sarmiento, quien denunció la infiltración del narco en la política antes de ser asesinado por el Cártel de Medellín⁵. En este contexto se forjó el carácter del joven político, quien entendió que el narcotráfico no era un problema periférico, sino un actor activo —aunque no reconocido— encargado de socavar la democracia desde sus entrañas. Desde su militancia en el Centro Democrático, partido liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez⁶, denunció la incapacidad del gobierno de Gustavo Petro y su política de “Paz Total”, señalando cómo el ciclo de violencia de los años 80 y 90 parece retornar debido a la falta de políticas de seguridad adecuadas⁷.

3 Presidencia de la República de Colombia, “Julio César Turbay Ayala,” *Así es Colombia*, consultado el 7 de mayo de 2026, <http://historico.presidencia.gov.co/asiescolombia/presidentes/62.htm>.

4 Andrea Díaz Cardona, “Una tragedia que se repite 34 años después: la historia de Diana Turbay y Miguel Uribe, madre e hijo, asesinados en Colombia,” *BBC News Mundo*, 11 de agosto de 2025, <https://www.bbc.com/mundo/articulos/cdx0035n74ro>.

5 El Espectador, “El día que mataron a Galán: crónica triste de una tragedia anunciada,” *El Espectador* (Cromos), 18 de agosto de 2021, <https://www.elespectador.com/cromos/famosos/el-dia-que-mataron-a-galan-cronica-triste-de-una-tragedia-anunciada/>.

6 Presidencia de la República de Colombia, “Álvaro Uribe Vélez,” *Presidencia de la República*, consultado el 7 de mayo de 2026, http://historico.presidencia.gov.co/presidente/hoja_auv4.htm.

7 Camila Osorio, “La paz total, la ambiciosa apuesta de Gustavo Petro que se ha atomizado en tres años de gobierno,” *El País* (América Colombia), 7 de agosto de 2025, <https://elpais.com/america-colombia/2025-08-07/la-paz->

El asesinato de Miguel ayuda a dimensionar cómo el narcotráfico ejerce un “derecho a veto” en las sociedades políticas de América Latina. Su caso no es un hecho aislado: el 9 de agosto de 2023, en Ecuador, fue asesinado el candidato Fernando Villavicencio por grupos criminales vinculados al narco⁸. Esto evidencia que estas organizaciones ya no solo buscan financiar elecciones o influir mediante lobbistas, sino que tienen la capacidad de alterar el rumbo electoral mediante el asesinato selectivo o la imposición de sus propios candidatos.

Bajo esta hipótesis, cabe preguntarse si ya es momento de considerar al narcotráfico como un actor desleal de nuestros procesos electorales. En este 2026, las nuevas organizaciones criminales tienen un objetivo claro: ser actores decisores en una región que se debate entre la consolidación autocrática o una democratización duradera que aprenda de los errores estructurales. La desigualdad, la corrupción, el clientelismo y el populismo han sido el caldo de cultivo perfecto para organizaciones paraestatales que suplen al Estado inexistente para ganar adeptos en las economías criminales.

Transición y resiliencia: La nueva estrategia de infiltración criminal.

Para entender este fenómeno, es necesario explicar la transición de los cárteles tradicionales de los 90 hacia estas nuevas organizaciones que funcionan como una hidra de múltiples tentáculos.

total-la-ambiciosa-apuesta-de-gustavo-petro-que-se-ha-atomizado-en-tres-anos-de-gobierno.html.

- 8 BBC News Mundo, “Fernando Villavicencio: el político de las denuncias que murió asesinado en su «cruzada» contra las mafias y la corrupción en Ecuador,” 10 de agosto de 2023, <https://www.bbc.com/mundo/articles/cx90zj5lyejo>

A diferencia del Cártel de Medellín⁹ o el de Cali, que desaparecían o entraban en fase anárquica al ser descabezados sus líderes, las bandas actuales han diseñado estrategias de infiltración institucional más resilientes. Enfocadas inicialmente en el microtráfico, la extorsión y el secuestro en zonas de nula presencia estatal, han escalado posiciones mediante una fórmula de violencia y corrupción. Un paso fundamental fue la creación de economías sumergidas: la compra de abastos, panaderías y centros comerciales no solo sirve para el lavado de activos, sino para generar una dependencia donde el ciudadano queda atrapado en el sistema¹⁰. El control económico resulta así más efectivo y menos ruidoso que la violencia abierta, anulando la conciencia ciudadana y normalizando un pragmatismo donde el progreso solo se concibe a través del dinero sucio.

Este modelo penetra en todos los estratos, involucrando a empresarios, jueces y políticos, poniendo en jaque el sistema democrático. Para mantenerse, el narcotráfico requiere anular la institucionalidad, que es el elemento más frágil de América Latina. Cuando la justicia se percibe como un valor abstracto, la ley del más fuerte sustituye al Estado de derecho. La infiltración hoy es mimetizada: la compra de un juez o un concejal puede parecer un hecho aislado, pero el control de una bancada en el congreso o de un circuito judicial permite diluir el tejido social sin disparar una sola bala.

9 InSight Crime, "Cartel de Medellín", consultado el 8 de mayo de 2026, <https://insightcrime.org/es/noticias-crimen-organizado-colombia/cartel-de-medellin/>.

10 CNN Español, "Así era el Cártel de Cali, la que fue conocida como la organización narcotraficante más grande del mundo," 1 de junio de 2022, <https://cnnespanol.cnn.com/2022/06/01/asi-era-el-cartel-de-cali-la-que-fue-conocida-como-la-organizacion-narcotraficante-mas-grande-del-mundo>

Cooptación transnacional y financiación electoral: El tren de Aragua.

En concordancia con esto, estas organizaciones tienen características transnacionales, como es el caso del Tren de Aragua¹¹. Surgido de la extorsión sindical en Venezuela, hoy es una red con presencia en todo el continente y nexos con grupos como Hezbollah o el Cártel de Sinaloa¹². Esta organización se ha dedicado a la desestabilización regional, financiada en parte por el régimen de Nicolás Maduro o las disidencias de las FARC (Nueva Marquetalia), operando en conjunto para socavar la democracia en Colombia¹³. Ejemplo de esto fue su participación en el asesinato del teniente Ronald Ojeda en Chile, lo que demuestra cómo el crimen organizado está al servicio de poderes autoritarios. Su objetivo no es destruir al Estado, sino cooptarlo y doblarlo a sus intereses¹⁴.

Finalmente, adentrándonos en la clave de este análisis, vemos cómo el narcotráfico es ya un actor electoral directo. En las elecciones presidenciales de Colombia, la campaña de Gustavo Petro recibió financiamiento de organizaciones criminales a través de

11 InSight Crime, “Tren de Aragua”, consultado el 8 de mayo de 2026, <https://insightcrime.org/es/noticias-crimen-organizado-venezuela/tren-de-aragua/>.

12 Infobae, “Cómo la alianza entre Hezbollah, Irán y la dictadura de Maduro construyó un imperio del narcotráfico en Venezuela”, 7 de septiembre de 2025, <https://www.infobae.com/venezuela/2025/09/07/como-la-alianza-entre-hezbollah-iran-y-la-dictadura-de-maduro-construyo-un-imperio-del-narcotrafico-en-venezuela/>

13 InSight Crime, “Venezuela: ¿Un cementerio para la ex-FARC Mafia?”, 23 de mayo de 2022, <https://insightcrime.org/es/investigaciones/venezuela-cementerio-exfarc-mafia/>.

14 La Hora de Venezuela, “The Targeted Assassination of Ronald Ojeda”, *Caracas Chronicles*, 21 de febrero de 2025, <https://www.caracaschronicles.com/2025/02/21/the-targeted-assassination-of-ronald-ojeda-moreno/>

su hijo, Nicolás Petro¹⁵ —imputado por corrupción—. A esto se suma el escándalo de Armando Benedetti, cuyos audios revelaron la presunta compra de votos en la región Caribe con dinero de dudosa procedencia¹⁶. Estas estrategias de “financiamiento vs. intimidación” buscan comprar bases políticas y eliminar cualquier disidencia interna. En países como Venezuela y Colombia, estos sistemas criminales sustituyen las funciones del Estado en salud e infraestructura, estableciendo grupos paramilitares que garantizan el “orden” bajo sus propios intereses, forzando al ciudadano a una sumisión absoluta para conservar su patrimonio o su vida¹⁷.

Países clave y el narco como actor decisivo (2025-2027)

Sin duda, es fundamental entender cómo, en medio de esta etapa súper electoral (2025-2027), el escenario en América Latina se presenta más incierto que nunca. Vemos cómo los viejos debates de candidatos de “izquierda vs. derecha” han quedado atrás; hoy, el elector sudamericano busca dos cosas fundamentales: orden y estabilidad económica. Estos factores, muchas veces, no vienen acompañados de un proyecto democrático, y es aquí donde las organizaciones criminales juegan un papel determinante. Según el último informe de riesgo político de 2026, uno de los principales peligros que enfrenta la región es la desaparición del Estado como

15 Valentina Parada Lugo, “Las acusaciones de financiación narco en la campaña de Petro reviven a cuatro meses de su salida”, *El País*, América Colombia, 20 de marzo de 2026, <https://elpais.com/america-colombia/2026-03-20/las-acusaciones-de-financiacion-narco-en-la-campana-de-petro-reviven-a-cuatro-meses-de-su-salida.html>

16 Caracol Radio, “Los audios que enredan al ministro Armando Benedetti”, 19 de mayo de 2025, <https://caracol.com.co/2025/05/19/los-audios-que-enredan-al-ministro-armando-benedetti/>

17 Jorge Sahd y Daniel Zovatto, “Riesgo Político en América Latina 2026”, *Diálogo Político*, 14 de enero de 2026, <https://dialogopolitico.org/documentos/riesgo-politico-en-america-latina-2026/>

mecanismo regulador y su sustitución por estructuras criminales que terminan cooptando las instituciones.

Otro punto fundamental a tener en cuenta son los países donde se presentan elecciones y las implicaciones del narcotráfico en las mismas. Por ejemplo, Colombia sigue siendo el país con mayor capacidad de producción de cocaína en América Latina, con 255,000 hectáreas sembradas, lo que representa un aumento del 10% respecto a años anteriores¹⁸. Por otro lado, Perú —que también enfrenta procesos legislativos y presidenciales— se mantiene como uno de los principales cultivadores con 92,000 hectáreas, especialmente en el área amazónica. Esta zona colinda con Brasil, país que también atraviesa un año electoral y funciona como el principal consumidor del continente, además de ser el puente ideal hacia los mercados de Europa y África.

¿Pero qué tiene esto que ver con el proceso electoral? La respuesta reside en el carácter transnacional de los nuevos cárteles y en la existencia de gobiernos autoritarios que sirven de protección a bandas criminales y financistas, influyendo en los comicios a través de sus estructuras paraestatales.

En este mapa, entran tres países clave como grandes paladines del narcotráfico: Venezuela, México y Ecuador. Estos casos son el ejemplo paradigmático de cuando el narco toma el poder y lo convierte en un problema de seguridad hemisférica. Los cárteles mexicanos, por ejemplo, son los grandes articuladores del financiamiento y la operatividad en toda la región. El Cártel de Sinaloa (con sus distintas facciones) y el Cártel de Jalisco Nueva Genera-

18 El Tiempo, "Colombia, principal productor de cocaína: la droga que más creció con un aumento del 37 % en su producción: ONU", 18 de marzo de 2026, <https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/colombia-principal-productor-de-cocaina-la-droga-que-mas-crecio-con-un-aumento-del-37-en-su-produccion-onu-3535682>

ción (CJNG) funcionan como un gran *holding* dedicado a financiar iniciativas de pequeñas bandas locales para introducirlas en el negocio. Actualmente, son los más avanzados en el mercado del fentanilo y las anfetaminas, consolidándose como los “reyes” de las drogas sintéticas. Su grado de influencia es crítico en Ecuador y Perú, donde jugaron un papel clave en los últimos procesos electorales¹⁹.

Ecuador, por su parte, es el país donde el Estado parece estar perdiendo el control territorial debido al avance de bandas transnacionales que responden al Tren de Aragua, al Cártel de Sinaloa y a mafias albanesas. La región norte y la zona del Pacífico son las más afectadas por la guerra entre bandas; de hecho, en 2025, Ecuador se registró como uno de los países más violentos del continente, alcanzando una tasa de 45.7 asesinatos por cada 100,000 habitantes. A esto se suma que es el principal puerto de salida de droga en el Pacífico, con Guayaquil y Manta como ciudades en disputa permanente entre el Estado y el crimen²⁰.

El caso venezolano es, quizás, el más dramático: es el ejemplo vivo de cómo el Estado finalmente se mimetiza con las organizaciones criminales²¹. Aquí se evidencia que el Estado no solo ya no combate al crimen, sino que lo protege, le brinda logística y comparte sus ganancias; el Estado mismo se ha convertido en un

19 Tanja Blut, “El imparable auge mundial de la cocaína,” *DW*, 20 de junio de 2025, <https://www.dw.com/es/el-imparable-auge-mundial-de-la-coca%C3%ADna/a-72990270>

20 Vanda Felbab-Brown, “The foreign policies of the Sinaloa Cartel and CJNG – Part II: The Asia-Pacific,” *Brookings*, 5 de agosto de 2022, <https://www.brookings.edu/articles/the-foreign-policies-of-the-sinaloa-cartel-and-cjng-part-ii-the-asia-pacific/>

21 InSight Crime, “Cartel de los Soles,” consultado el 8 de mayo de 2026, <https://insightcrime.org/es/noticias-crimen-organizado-venezuela/cartel-de-los-soles-perfil/>

cártel. Es una estructura diseñada para controlar el poder gracias al rédito del tráfico de drogas. Esta nueva forma de organización no es igual a la de Pablo Escobar; no existe un organigrama lineal de mando, sino un conjunto de empresarios y políticos al servicio del crimen organizado que actúan, de manera activa o por omisión, permitiendo el avance delictivo.

Es vital entender el caso de Venezuela como el epicentro del narcoterrorismo internacional. En su territorio confluyen organizaciones como el Tren de Aragua, Hezbollah, el ELN, las disidencias de las FARC (Nueva Marquetalia) y Hamás, junto a cuerpos de seguridad involucrados en actividades ilícitas. Esto convierte al país en un auténtico problema geopolítico. Los grupos criminales colombianos, por ejemplo, cuentan con la ventaja de actuar en Colombia y refugiarse en Venezuela, financiándose además del tráfico de combustible venezolano o la extracción activa de oro y coltán. En cuanto a los cárteles mexicanos, usan a Venezuela como base de operaciones financieras para lavar activos y movilizar capitales hacia Ecuador, Colombia y Brasil^{22,23}.

Más allá de lo financiero, el régimen autoritario venezolano ha demostrado un poder decisorio sobre los procesos electorales del continente mediante financiación ilegal y desorden público. En 2025, el régimen dio un paso más allá al estar involucrado en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay a través de las disidencias

22 Infobae, "CJNG y Cártel de Sinaloa se apoderan de América Latina y exportan violencia", 17 de enero de 2025, <https://www.infobae.com/mexico/2025/01/17/cjng-y-cartel-de-sinaloa-se-apoderan-de-america-latina-exportan-violencia/>

23 Sebastián A. C. Torres, "Ecuador y la nueva Guerra del Narcotráfico en Sudamérica," *Nomadizers* (blog), 15 de marzo de 2024, <https://blog.nomadizers.com/index.php/ecuador-y-la-nueva-guerra-del-narcotrafico-en-sudamerica/>

de las FARC²⁴. Esto nos muestra hasta dónde llega la alianza entre narcotráfico y autoritarismo: son lanzador y receptor en un juego donde el rival a “ponchar” es la democracia. Este juego macabro se expande mientras muchos políticos prefieren ignorar el fenómeno o, en el peor de los casos, integrarse al sistema. La batalla democrática requiere hoy más que armas; necesita integridad, valores y la valentía de no claudicar ante un sistema que busca quebrarnos moralmente.

Estrategias de combate: El contraste entre “Paz Total” y “Escudo de las Américas”

Este panorama llevó a los Estados Unidos a tomar una postura de vital importancia. La militarización del Caribe desde agosto de 2025²⁵, la destrucción de narcolanchas y la posterior extracción de Nicolás Maduro el 3 de enero²⁶ representan una política clara de ataque al narcotráfico. Una de las últimas iniciativas es la alianza Escudo de las Américas, creada en Miami. En ella, los aliados regionales se comprometieron a trabajar en conjunto, siendo Ecuador uno de los más beneficiados tras realizar operativos en su

24 El Nacional, “El dinero para el magnicidio de Miguel Uribe provino de Venezuela”, febrero de 2026, <https://www.elnacional.com/2026/02/el-dinero-para-el-magnicidio-de-miguel-uribe-provino-de-venezuela/>

25 The New York Times, “Estados Unidos despliega fuerza militar en el Caribe en un mensaje a Venezuela,” 6 de septiembre de 2025, <https://www.nytimes.com/es/2025/09/06/espanol/estados-unidos/despliegue-militar-eeuu-caribe-venezuela.html>

26 The New York Times, “Estados Unidos captura a Nicolás Maduro en una operación especial,” 3 de enero de 2026, <https://www.nytimes.com/es/2026/01/03/espanol/estados-unidos/captura-maduro-operacion.html>

frontera norte^{27,28}. Esto ha generado tensiones con el gobierno de Gustavo Petro, quien defiende la estrategia opuesta denominada “Paz Total”. Este plan, enfocado en la no destrucción de cultivos de coca, la desmilitarización y los diálogos con organizaciones terroristas bajo reconocimiento político, ha sido criticado por expertos²⁹. Argumentan que ha permitido la consolidación territorial del ELN y las FARC de Iván Mordisco en zonas como la Guajira o el Catatumbo³⁰, generando desplazamientos masivos y cuestionando la presencia real del Estado colombiano en su propio territorio.

La alianza Escudo de las Américas busca, bajo el apoyo estadounidense, que la fuerza sea el principal mecanismo para desarticular los cárteles y frenar la influencia de potencias ajenas a los intereses de Occidente. Está integrada por 12 países, entre los que destacan Argentina, Paraguay, Chile, Bolivia, Perú, Panamá y El Salvador, entre otros. Sin embargo, la ausencia de México, Colombia y Brasil genera dudas sobre el compromiso regional, mientras

27 BBC News Mundo, “Escudo de las Américas: la fuerza multinacional que asume el control tras el magnicidio de Miguel Uribe y la caída de Maduro”, 4 de mayo de 2026, <https://www.bbc.com/mundo/articulos/cjr9j55wnwo>.

28 CNN en Español, “Estados Unidos inicia operaciones conjuntas en Ecuador contra grupos criminales calificados de terroristas”, 3 de marzo de 2026, <https://cnnspanol.cnn.com/2026/03/03/latinoamerica/stados-unidos-operaciones-conjuntas-ecuador-grupos-criminales-terroristas-orix>

29 Swissinfo, “Petro asegura que el fracaso de la paz en Colombia ‘no es personal’ sino «nacional»”, abril de 2026, <https://www.swissinfo.ch/spa/petro-asegura-que-el-fracaso-de-la-paz-en-colombia-%22no-es-personal%22-sino-%22nacional%22/91273748>

30 Lucas Reynoso, “El Catatumbo marca un récord en la larga historia del desplazamiento forzado en Colombia”, *El País*, América Colombia, 26 de enero de 2025, <https://elpais.com/america-colombia/2025-01-26/el-catatumbo-marca-un-record-en-la-larga-historia-del-desplazamiento-forzado-en-colombia.html>

estos países argumentan que la alianza es una excusa para aumentar la influencia de Washington. El objetivo es crear una fuerza de tarea conjunta que golpee los financiamientos criminales, frene la migración y disminuya la presencia de China, Rusia e Irán —este último con fábricas de drones en Venezuela e inteligencia activa en la región—³¹.

No obstante, esta estrategia genera incógnitas: puede ser inefectiva si no se acompaña de planes sociales en zonas donde el narco ya sustituyó al Estado. El uso de la fuerza sin inversión en educación, infraestructura y desigualdad puede generar rechazo social y opacidad. La mejor respuesta es la fuerza acompañada de institucionalidad; pero sin base social, es imposible que pueda vencer. Si la fuerza no viene acompañada de desarrollo, repetiremos el fracaso de la Operación Cóndor en el Triángulo Dorado de Sinaloa³². Aquella acción militar con Paraquat no solo destruyó cultivos de sustento lícito, sino que provocó la dispersión de los narcos hacia centros urbanos y su infiltración en agencias como la DFS, fortaleciendo el sistema corrupto³³.

31 Infobae, “El régimen de Nicolás Maduro instaló en Venezuela una fábrica de drones para uso bélico con la cooperación de Irán”, 19 de enero de 2025, <https://www.infobae.com/venezuela/2025/01/19/el-regimen-de-nicolas-maduro-instalo-en-venezuela-una-fabrica-de-drones-para-uso-belico-con-la-cooperacion-de-iran>

32 Infobae, “Operación Cóndor o el primer pacto narco-policías de México”, 30 de noviembre de 2023, <https://www.infobae.com/mexico/2023/11/30/operacion-condor-o-el-primer-pacto-narco-policias-de-mexico/>

33 Secretaría de Gobernación, “Dirección Federal de Seguridad (DFS)”, Sitios de Memoria, consultado el 8 de mayo de 2026, https://sitiosde-memoria.segob.gob.mx/es/SitiosDeMemoria/Direccion_Federal_de_Seguridad

Modelos de éxito contra el crimen: Lecciones de Medellín y Palermo.

El narcotráfico no es invencible. Medellín es el ejemplo fundamental: pasó de ser la capital mundial del crimen a rescatar su tejido social mediante el Urbanismo Social. Bajo la tesis de “lo más bello para los más humildes”, se construyeron parques-bibliotecas y centros tecnológicos (como el de Santo Domingo Savio) en espacios antes controlados por bandas. La inversión en infraestructura, como el Metrocable, acabó con el mito del “narco-benefactor”. La presencia institucional permanente en salud y educación demostró que la paz trae desarrollo. En Medellín, la fuerza no desapareció, sino que se institucionalizó y se especializó en entornos hostiles respetando los Derechos Humanos, logrando que la policía fuera vista como parte de la comunidad³⁴.

Otro modelo es el de Palermo, liderado por Leoluca Orlando a finales de los 80. Su estrategia de “las dos ruedas” combatió la “mafia” mediante dos ejes: uno institucional, con una justicia valiente liderada por los jueces Falcone y Borsellino, y otro cultural, enfocado en romper la “Omertá” o código del silencio³⁵. Recuperar plazas, teatros y fomentar la educación en valores de honestidad cambió la visión de la ciudadanía. La lección para el continente es clara: para que la lucha funcione, el eje social y el de la fuerza deben trabajar en sincronía.

34 Infobae, “Cómo hizo Medellín para pasar de ser la ciudad más violenta del mundo a un modelo en seguridad para la región”, 10 de noviembre de 2018, <https://www.infobae.com/america/colombia/2018/11/10/como-hizo-medellin-para-pasar-de-ser-la-ciudad-mas-violenta-del-mundo-a-un-modelo-en-seguridad-para-la-region/>.

35 Luis Alberto Salinas Arreortua, “El modelo de Palermo”, *Centro Urbano*, 16 de julio de 2021, <https://centrourbano.com/revista/opinion/el-modelo-de-palermo/>.

Conclusión: La urgencia de la batalla democrática.

Ante estos escenarios, las preguntas son inevitables: ¿Estamos ante una repetición de los ciclos de violencia de los 90? ¿Se instaurarán más modelos autocráticos auspiciados por el dinero sucio? ¿Basta solo la fuerza? Hoy el narcotráfico es un actor activo desde la Patagonia hasta los EE. UU. En México, el gobernador de Sinaloa enfrenta acusaciones en cortes estadounidenses³⁶; en Colombia, persisten dudas sobre candidatos con nexos criminales; y en Venezuela, a pesar del arresto de Maduro, el Cártel de los Soles mantiene tentáculos en el poder.

Si los agentes de cambio no diseñamos políticas de rescate del tejido social y entendemos que la libertad económica es esencial para vencer la desigualdad, seguiremos enterrando a figuras como Fernando Albán, Luis Carlos Galán, Diana Turbay y Miguel Uribe. Es un deber moral entender que el narcotráfico no es un fenómeno electoral más, sino un actor dispuesto a destruir la democracia para alcanzar el control total. Mientras no comprendamos el daño que este sistema causa a nuestra libertad, no podremos alcanzar la democracia por la que tanto lucharon nuestros padres fundadores.

36 France 24, “El gobernador mexicano acusado de narcotráfico por EE. UU. deja su cargo para ser investigado”, 3 de mayo de 2026, <https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20260503-el-gobernador-mexicano-acusado-de-narcotr%C3%A1fico-por-eeuu-deja-su-cargo-para-ser-investigado>

Autores

■ **Adriana Boersner Herrera**

Internacionalista, magíster en Ciencia Política por la Universidad Simón Bolívar y doctora en Ciencia Política por la Universidad de Missouri. Profesora asistente de Ciencia Política en The Citadel (EE.UU.). Ha publicado sobre política exterior venezolana, relaciones internacionales y autocratización. Es miembro activo de redes académicas internacionales dedicadas a la democracia y los derechos humanos.

■ **Elsa Cardozo**

Internacionalista y doctora en Ciencias Políticas (UCV). Profesora titular jubilada de la UCV. Fue directora de la Escuela de Estudios Liberales en la Universidad Metropolitana y docente de postgrado en la USB. Especialista en relaciones internacionales, geopolítica y análisis del entorno global autoritario. Autora de numerosos artículos y libros académicos sobre política internacional y democracia.

■ **Juan Miguel Matheus**

Miembro fundador del Instituto *Forma*. Coordinador de la junta de dirección nacional de Primero Justicia. Doctor en derecho constitucional de la Universidad de Navarra en España. Investigador de la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos. Diputado a la Asamblea nacional 2015 por el estado Carabobo.

■ **Lucía Galeno**

Licenciada en Estudios Internacionales y Especialista en Gerencia de Proyectos de Investigación y Desarrollo por la Universidad Central de Venezuela (UCV). En el ámbito universitario destaca como profesora e investigadora, ocupando actualmente el cargo de Jefe de la Cátedra Histórica de las Relaciones Internacionales en dicha institución. A la par de su sólida vocación académica, cuenta con una importante trayectoria en el sector privado como consultora de empresas, donde aplica su amplia experiencia como experta en planificación estratégica y gerencia de proyectos.

■ **Jesús E. Mazzei Alfonso**

Politólogo venezolano, doctor en Ciencias Políticas. Profesor e investigador especializado en política comparada, relaciones internacionales y análisis regional. Ha sido articulista en diversos medios académicos y de opinión.

■ **Rommer A. Ytriago F.**

Profesor adscrito al Departamento de Relaciones Internacionales de la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela. De igual modo Profesor adscrito al Centro de Estudios de Postgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, Especialización en Derecho y Política Internacional. Especialista en Geopolítica de las Relaciones OTAN-Rusia, Rusia y Europa Oriental. Coordinador de la Revista *CERO* de Venpais Centro de Ideas. Líder de Investigación de Venpais Centro de Ideas. Así

como también, miembro fundador de Venpais Centro de Ideas (*Think Tank*) 2019 .

■ **Kevin Canales García**

Director de Formación de *IdeaPaís*. Profesor de la Universidad de Concepción y Magíster en Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

■ **Sebastian Horesok**

Politólogo y maestrante en Historia de América Contemporánea. Su trabajo de investigación se centra en la historia de las ideas, la filosofía política y la evolución de las instituciones democráticas. Se ha desempeñado como profesor en la Universidad Central de Venezuela (UCV) y en la Universidad Monteávila. Además, es coeditor del libro *Zigzagueando la democracia* (2024).

Índice

El año electoral de América Latina: democracia e implicaciones para Venezuela Adriana Boersner-Herrera	3
Elecciones en Colombia: seguridad, economía e institucionalidad regional Elsa Cardozo	15
El horizonte electoral latinoamericano Juan Miguel Matheus	25
2026: Año electoral en América Latina. Perspectiva Histórica. Lucía Galeno	34
Brasil perspectivas electorales Jesús E. Mazzei Alfonso	45
<i>Veni, vidi, vici</i> : Donald Trump, realismo político, América Latina y desorden multipolar Rommer A. Ytriago F.	57
La fragilidad de la democracia: transición y cultura republicana en Chile Kevin Canales García	73
Democracias bajo asedio. El narco como el gran elector de América Latina Sebastian Horesok	86
Autores	100